ENRIQUE MARIO MARTÍNEZ

UNA QUE *PODAMOS TODOS*

REFLEXIONES Y EXPERIENCIAS
DE LA PRODUCCIÓN POPULAR

Ediciones CONSTRUCCIÓN COLECTIVA

IPP INSTITUTO PARA LA PRODUCCIÓN POPULAR

-2014-

ENRIQUE MARIO MARTÍNEZ

UNA QUE PODAMOS TODOS

REFLEXIONES Y EXPERIENCIAS DE LA PRODUCCIÓN POPULAR

Ediciones CONSTRUCCIÓN COLECTIVA

IPP INSTITUTO PARA LA PRODUCCIÓN POPULAR

-2014-

ÍNDICE

4. Prólogo

5. Reflexiones teóricas sobre la producción popular

6. Levantemos las barreras

8. Sumando de a uno

10. Organizar las unidades de producción popular

12. Recapitulemos: ¿qué es la producción popular?

14. El mito de la competitividad

16 La ley hace la trampa

18. Lo público, lo privado y lo comunitario

20. La producción popular y la clase media

22. El financiamiento entre pares

24. Economía circular: oportunidad o trampa

26. Los actores sociales con miedo escénico

28. Además de empleo, hay otro trabajo

30. La producción popular y la justicia social

32. Experiencias concretas de la producción popular

33. Tapalqué quiere producir lo que consume

35. Hilando fino

37. En Europa, la producción popular se consigue

39. El pan es más que un alimento

41. Los colores de la tierra

43. Los pueblos recolectores en el siglo XXI

45. Verdura fresca y fruta jugosa

47. La leche es blanca y, a la vez, oscura

49. El reciclado y la producción popular

51. Podemos acostumbrarnos a ver el agua burbujear

53. Los bagayeros textiles internos

55. El trópico nacional casi ignorado

57. Una propuesta final

58. ¿No seremos pobres la mayoría?

PRÓLOGO

Enrique Martínez escribió, entre el 6 de marzo y el 28 de agosto de 2014 una serie de notas que se publicaron en Tiempo Argentino bajo el título general de "Una que podamos todos"; a eso se debe agregar un bonus track del 7 de setiembre titulada "¿No seremos pobres la mayoría?".
Cuando se presenta a Enrique Martínez se dice que es Ingeniero, que fue decano de la facultad de ingeniería, secretario PYME, diputado y presidente del INTI, y que actualmente preside el Instituto para la Producción Popular. Pero en esta serie de notas sale a la luz un título que, para aquellos que conformamos el campo popular, es mucho más importante, el de "militante del proyecto nacional".
Tomando como tema central la economía, y utilizando un punto de vista industrialista, recorre todo el espectro de lo que se llama la "producción popular" aportando, como corresponde a su estilo, una serie de datos irrefutables y, muchas veces, desconocidos. Mencionar que en Europa existe una economía popular, no es algo que les escuchemos decir a los economistas argentinos cuando hacen sus análisis televisivos o "secretos".
Y por qué digo que en esta serie de notas surge el militante. Muy sencillo, porque no es sólo una sucesión de números fríos que demuestran una teoría, sino que constituyen casi un plan de Gobierno. En sus análisis, nos cuenta las ventajas de la economía popular, las amenazas externas e internas, como el caso de auto explotación existente en el sector textil, los problemas de implementación por leyes inadecuadas y la forma de corregir esas inequidades, aportando abundantes ejemplos nacionales e internacionales, respetando siempre las demandas socialmente necesarias y hasta cuestionando la forma de medición de la pobreza.
Prepárense pues, para leer el más completo compendio de reflexiones sobre la producción popular, hecho en un lenguaje coloquial y entendible por todos, que -estoy seguro- cambiará la percepción que se tiene en la actualidad de la economía. Si el lector es un defensor de la economía de mercado, encontrará aquí detallado, de manera muy precisa, cuáles son sus límites. Y si, en cambio, es partidario de la economía social, aquí encontrará un análisis de sus fortalezas y debilidades, que además cuenta con el aporte de las herramientas necesarias para su implementación. Y si, como yo, es un militante del campo nacional, popular y democrático, con nulos o rudimentarios conocimientos económicos, va a encontrar herramientas necesarias para poder guiar la labor militante, de manera muy clara y sencilla.
Compartamos entonces, la mejor lectura de economía popular militante.

Claudio Villella
Licenciado en
Relaciones Industriales
Militante social
en José C. Paz.
Integrante del IPP

REFLEXIONES TEÓRICAS *SOBRE PRODUCCIÓN POPULAR*

LEVANTEMOS *LAS BARRERAS*

Esta es la primera nota de lo que se espera sea una serie regular, y la primera obligación es justificar el título de la sección. Aquí nos ocuparemos de la producción popular en sentido amplio; de todos aquellos bienes o servicios que estén al alcance de organizaciones locales, cooperativas o no, y que satisfagan demandas socialmente necesarias. Nuestro prejuicio es que si esta idea –"la producción popular"– hubiera estado presente en el título, muchos de los que están leyendo esta introducción habrían seguido de largo. Habrían pensado que se expondría sobre algunas de las formas asistenciales o folklóricas de abordaje, que son tan habituales, que ponen a la producción diseminada por el cuerpo social como resabio de un tiempo pre capitalista, que no soporta la confrontación con la nueva economía global.

No es ese el planteo aquí. Muy lejos de esa mirada. Por el contrario, intentamos mostrar las trabas o la falta de atención que nuestra ignorancia colectiva y/o el accionar de los más poderosos, han puesto para el desarrollo de infinidad de iniciativas que podrían concretarse desde el colectivo social más elemental. La economía se ha ido concentrando por décadas; parte de esa concentración se ha visto reflejada en reglamentaciones o en sesgos promocionales que dificultan la actividad de los más pequeños; hasta que las mayorías han llegado a creer que la estructura productiva actual es la que se puede y por lo tanto debe ser así.

La consecuencia central de esa lógica se despliega en dos facetas: Por un lado, la satisfacción de nuestras necesidades básicas queda a cargo de un puñado de empresas, con las cuales parece no quedar otra que

negociar, para que nos embromen lo menos posible. Por el otro, quedan demandas comunitarias sin atender, porque no aparece un negocio asociado a ellas, sobre todo en aspectos ambientales y de infraestructura. Aquí iremos analizando aspectos de esta inmensa telaraña invisible, que nos deja inermes o en el mejor de los casos como espectadores de una puja entre las corporaciones y el Estado, que busca representar a los consumidores, pero jugando partidos en una cancha productiva donde no hay aliados del común, lo cual nos coloca inexorablemente a la defensiva.

Se trata, en suma, de bregar por la democracia económica, desde una combinación de teoría y práctica, analizando casos concretos que refuercen nuestro bagaje argumental. Veamos un primer caso.

La industria alimenticia en pequeña escala se expresa en producción de quesos, embutidos, mermeladas, encurtidos o en la faena y elaboración de cabritos, cerdos o llamas, en un listado no excluyente. Sin temor a exagerar se podría decir que cada pueblo de cada provincia argentina tiene productores de varios de los alimentos mencionados. Sin embargo, en los supermercados de esos mismos pueblos rara vez están los productos locales. Ni qué decir de su presencia en otras ciudades o en otras provincias. Hay obvias dificultades de logística que impiden a un pequeño productor estar en la misa y en la procesión. Pero hay una dificultad mayor, que bloquea por completo, la aparición de posibles organizaciones de distribución que amplíen el espectro de oferta alimenticia: es la tortuosa reglamentación sanitaria, que apenas se bucea tiene influencias decisivas de las grandes empresas.

La salud de la población es el argumento central, que pronto se entiende como una excusa. Hay reglamentos para mataderos, por ejemplo, de habilitación rural, municipal, provincial y nacional. El producto admisible en la mesa de un pueblo, deja de serlo si se lo llevara a 50 kilómetros de distancia. El resultado es que el ganadero vende el ganado en pie o que parte de la carne de un matadero municipal es disfrazada de propia por quien tiene una habilitación de mayor jerarquía, con el consiguiente beneficio espurio a cambio de ningún agregado de valor.

Más notorio es el caso de una mermelada. Es un producto cuya conservación es fácil de conseguir, por un tiempo muy prolongado. En una provincia, sin embargo, se consigue con cierta facilidad la habilitación municipal. Para vender en otro municipio es un drama. En Buenos Aires, para eso hay que hacer un trámite en La Plata, que para cada tipo de mermelada o encurtido –es habitual que una pequeña empresa tenga más de 50 productos– cuesta más de 5000 pesos. Y basta modificar un componente para tener que rehacer todo el trámite. Conclusión: apenas una pequeña fracción completa el trámite y el resto vende en su pueblo o en ferias itinerantes, con etiquetas precarias, siempre al borde la multa, cuando lo que falla es la reglamentación.

Los cabritos cordobeses vendidos casa por casa; los quesos caseros entrerrianos ofrecidos en la ruta; la masa de mozzarella que transita por la noche para terminar clandestina en pizzerías del Gran Buenos Aires; no son la expresión del "pobrerío que se las rebusca". Son, en cambio, la evidencia de un sistema de normas que detrás de la fachada de la salud pública, protege a quien tiene más poder económico y hace invisibles a miles de productores que podrían expandir y diversificar la oferta, encuadrados en normas sanitarias sensatas, controladas a nivel municipal y que les habiliten por ello al tránsito nacional.

No hay escenario más claro para llevar a la práctica la repetida consigna de la igualdad de oportunidades que éste. Diseminar el sistema de control y habilitación bromatológica, equipando laboratorios de escala razonable para cada ciudad mayor de 200 mil habitantes o para cada agrupación espacial de dimensión razonable, adaptando la escala a cada realidad provincial, permitiría otorgar con toda tranquilidad conceptual habilitaciones nacionales para miles de productores que vienen mascando el freno por generaciones. En este caso, el camino es simple. Decidirse y ya.

SUMANDO *DE A UNO*

13 de Marzo de 2014

Vivimos en un mundo cuya tendencia es alejar a los ciudadanos cada día más de la producción concreta de bienes o servicios y limitar su participación en la economía al papel de consumidores.

Por un lado, tanto el enorme aumento de la productividad agropecuaria como la automatización industrial disminuyen la ocupación en tareas tradicionales y abren un abanico de nuevas opciones laborales, en disciplinas que hace un par de generaciones no existían –la informática, por ejemplo– o a las que nadie atendía, como el cuidado del ambiente. En principio, este cambio de lo que llamamos la matriz tecnológica no lleva mecánicamente a la reducción del trabajo, sino a cambios de perfil y en algunos casos a la necesidad de grandes reorientaciones de las experticias. Mirado desde la historia de la especie humana, resulta hasta fascinante enfrentar los desafíos derivados de la propia creatividad, de la mayor capacidad para transformar la naturaleza e interactuar en la comunidad.

Sin embargo, la evolución técnica hay que evaluarla dentro de la tendencia a la brutal concentración del capitalismo global.

Esto tiene dos consecuencias graves para el trabajo. Primero, las organizaciones ganadoras en la puja, tanto en lo productivo como comercial, son trasnacionales con sede en el mundo central, que seleccionan algunos eslabones de las cadenas de valor para instalar en las periferias y se reservan normalmente los de mayor valor agregado per cápita. Segundo, menos mencionado, es que esas corporaciones piensan en términos de escala cada vez más grande para sus instalaciones y lo pequeño, lo local, no sólo va siendo desvalorizado, sino que hasta se queda sin posibles aportes de tecnología y maquinaria. Se construye así un embudo, donde lo que podríamos llamar soluciones distribuidas, aquellas en que intervienen numerosas unidades pequeñas en redes explícitas o implícitas, dejan de ser concebidas como soluciones efectivas para problemas comunitarios.

Lo que sirve es lo grande y a cargo de trasnacionales o eventualmente el Estado. Lo demás no parece confiable, pasa a decir el inconsciente colectivo. El resultado general es que pocos pasan a producir todo y el resto nos limitamos a consumir, con ingresos que provienen de la administración pública o privada, o a participar de intermediaciones comerciales que crecen sin cesar y son una faceta más de la desocupación disfrazada. Para los menos exitosos quedan los subsidios y así cerramos el escenario. Esa lógica nos conduce a perder calidad de vida.

Elijo un caso ligado a la infraestructura: las cloacas. El 50% de la población argentina aún no tiene ese servicio y además, el sistema que funciona es tan deficiente, que ha causado ya hace décadas la dura contaminación del Río de la Plata y varios otros ríos del país. ¿Por qué sucede eso? Pues porque se ha instalado culturalmente el criterio que debe haber plantas de tratamiento centralizadas, a escala de una ciudad. Eso hace que las inversiones necesarias sean muy grandes para una obra y la falta de recursos lleva a que se dilaten las instalaciones. A falta de la prestación pública, cada unidad de vivienda construye pozos negros, cuyo diseño está a cargo de idóneos capacitados por simple tradición oral de sus mayores. Las aguas grises, por su parte, efluentes de la cocina y tareas de lavado, es habitual que recorran la banquina de las calles de los barrios, junto con el agua de lluvia.

Cuando la concentración de habitantes es muy alta, es necesario pensar en tratamientos centralizados. Pero en toda otra situación, que es la típica en buena parte del territorio argentino, existen las soluciones a escala de una vivienda o de una manzana. Pequeñas. Tienen, además, perfiles técnicos de sutileza creciente.

Primer nivel: *capacitar y certificar cooperativas de servicios para construir cámaras sépticas y pozos negros que cumplan con la legislación sanitaria vigente, que es buena, pero se incumple con gran frecuencia. Resulta casi increíble verificar que estos trabajadores hoy no tienen oferta de capacitación en ningún ámbito de nuestro sistema educativo.*

Segundo nivel: *promover la diseminación en el mercado de recipientes plásticos de larga duración que insertos dentro del pozo negro reduzcan la posibilidad de infiltraciones contaminantes. En el país hay un solo oferente, hasta donde conozco.*

Tercer nivel: *seguir el camino de empresas japonesas, inglesas o australianas, que han diseñado equipos simples, de bajo consumo energético, que hacen que el tratamiento sea tan completo que permiten que el efluente líquido se use para riego. En Japón se instalan centenares de miles de unidades anuales. Una subsidiaria australiana de la empresa líder japonesa sostiene instalar 40 mil unidades por año.*

Seguir esta secuencia, genera trabajo –mucho trabajo–, que se va jerarquizando a medida que se cambia de nivel y mejora la calidad de vida general. La condición necesaria es una sola: advertir que las soluciones participativas son más factibles que lo imaginado y más efectivas que aquellas que deben esperar una decisión concentrada y disponer de grandes sumas de dinero.

ORGANIZAR *LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN POPULAR*

Una faceta claramente inherente a la producción popular es que los proyectos no se piensan –no se deberían pensar– en términos de la lógica empresaria tradicional, sino que desde el mismo inicio se debería asumir el posible éxito o fracaso como patrimonio del grupo de ciudadanos involucrados. No sólo los productores de los bienes o servicios, sino también sus destinatarios deberían percibir el proyecto como un crecimiento colectivo de su calidad de vida, más allá de que unos accedan a nuevos ingresos y otros a nuevos o mejores consumos.

Esta no fue, de ninguna manera, la idea detrás de los primeros planes para promover unidades productivas en la base social, financiados por el Banco Mundial en todo el mundo y aquí iniciados a mediados de la década de 1990. En ese entonces, simplemente se empujaba a los excluidos a subirse a un último vagón del desarrollo, reproduciendo emprendimientos que competían en el mercado, con tan baja probabilidad de supervivencia que 20 años después resulta imposible encontrar alguno de aquellos. No es con algo de dinero y algo de asistencia técnica que un compatriota, su familia y una ayuda contratada pasarán a producir bienes que un consumidor elija y favorezca, frente a ofertas alternativas generadas por empresas con decenas o centenares de empleados y con correlativo poder económico.

Hace falta una organización productiva y una organización del contexto que asegure que se satisface una demanda social, que la nueva actividad se justifica más allá de su calidad y de su precio, factores importantes pero insuficientes. En estos intentos, los éxitos y los fracasos se reparten por el mundo.

En el comienzo del gobierno de Hugo Chávez, por ejemplo, se estableció un enorme programa de apoyo a cooperativas, para advertir al tiempo que no era la forma jurídica lo decisivo sino el marco en que se inscribía el trabajo, ya que la gran mayoría de los postulantes tomó los créditos y no concretó los proyectos. Con el tiempo, en Venezuela se avanzó hacia la creación de las comunas, dentro de las cuales deben funcionar cooperativas de producción concebidas ya como un fin superior al meramente empresario. Este espacio constituye uno de los laboratorios sociales más importantes e interesantes a escala mundial, porque allí se generan en el terreno concreto los conflictos entre las conducciones políticas del territorio comunal y los trabajadores cooperativizados, que reciben pautas de acción desde un ámbito que no es empresarial pero tampoco vive el día a día del trabajo. La enseñanza más inmediata que surge es que la división de roles, en que algún funcionario o dirigente político, aun con la mejor buena voluntad, asume un papel pseudoempresario -como un patrón que no trabaja codo a codo con los demás, pero sin embargo fija normas- puede bloquear el papel transformador de cualquier intento de organización productiva diferente de la tradicional. FASINPAT, una cooperativa creada sobre la quiebra de Cerámica Zanón en Neuquén, constituye un contraejemplo de análisis imprescindible, porque se trata de una unidad que agrupa a centenares de personas, que con el objeto de evitar esa división de roles que estiman nociva, tienen una conducción que se renueva bianualmente, pero además tienen un sindicato interno, en ambos casos elegidos por el conjunto de los trabajadores. Esa forma de funcionamiento lleva ya varios años y muestra que así se amplía las opciones de participación.

Además de lo que podríamos llamar las relaciones de poder, tanto al interior de las unidades productivas, como en relación con el poder político, el mercado o el Estado, está –como se dijo antes– la relación con los consumidores. Una panadería social tiene un vínculo inmediato con su entorno. Pero para reducir al mínimo la intermediación en

el abasto de hortalizas, o de indumentaria, o de tantos otros bienes, hay que hacer un análisis pormenorizado de la secuencia desde la producción hasta el consumo y construir los puntos de encuentro necesarios. Soluciones hay varias, pero todos debemos tener claro que en casi ningún caso basta con producir.

Decimos que democratizar la economía es central para los tiempos que vienen. Esencialmente, con eso queremos decir que el Estado debe asegurar que no haya barreras de entrada para nadie que quiera atender una demanda socialmente necesaria. Eso tiene una gama de traducciones concretas. Una de ellas se ha ejemplificado en la primera nota de esta serie y se agregarán futuras, para otros casos. Los actores sociales, sin embargo, debemos pensar adicionalmente cuáles son las formas de producir que evitarán que salgamos de la dependencia de un poder concentrado y caigamos en relaciones burocráticas, con pseudopatrones, o que atendamos la demanda a través de cadenas de intermediación tan densas que dejen sólo monedas en manos de quienes producen. Quedémonos con un número: en una colonia de Santiago del Estero, hace nueve meses, cualquier productor recibió netos 3,50 pesos por cada bolsa de 40 kg de cebolla. Esa relación de cruda –brutal– explotación sólo se modificará acercando al colono a quien consume la ensalada.

15 de Mayo de 2014

RECAPITULEMOS:

¿QUÉ ES LA PRODUCCIÓN POPULAR?

Esta es la décima nota de una serie con frecuencia semanal, que ha mostrado hasta aquí escenarios donde es posible y beneficioso pensar en incorporar nuevos actores productivos, sin límite mínimo de tamaño. Es un buen momento para rescatar los elementos comunes a todos, o a la mayoría de los casos, para que nos ayuden a configurar una teoría, un marco conceptual. El primer común denominador es la falta de resignación ante la inercia concentradora del capitalismo. Hay muy pocas situaciones productivas o de infraestructura en que existe una justificación técnica rotunda para no intentar la producción en pequeña escala. Los ferrocarriles son tal vez un ejemplo, y eso limitado al tendido de las vías, por encima de las cuales podrían circular trenes de diversa titularidad. En el plano industrial, en una situación tras otra, el ingenio de los innovadores se ha encargado de dar por tierra con las pretendidas barreras

por tamaño. De tal modo, se ha mostrado indirectamente que la concentración tiene que ver enteramente con la aplicación del poder económico para desplazar a competidores, a través del marketing o de acuerdos financieros o mil otras variantes, pero no con menores costos asociados a mayor producción.
Hasta la manufactura de acero, que siempre fue un ícono del gigantismo, fue puesta en jaque, en la década de 1980, por las mini acerías japonesas, que demostraron mayor versatilidad y flexibilidad, a igual costo. Primera consigna, entonces: la escala local o pequeña puede y debe ser pensada, con todos los chiches técnicos que busquen eficiencia y productividad, pero puede ser.

El segundo elemento que aparece en casi todos los ejemplos presentados es buscar la atención de demandas sociales esenciales para la vida cotidiana. Esa mirada no limita el alcance final de la producción popular, pero sirve para quebrar la hegemonía del pensamiento que abona el gigantismo.
En lugar de inversiones para hacer cloacas que estén fuera del alcance de una ciudad o pueblo pequeño, una red de tratamiento domiciliario bien hecha y bien supervisada. En lugar de poner obstáculos para el tránsito de alimentos elaborados en cada ciudad, facilitar ese intercambio. El pan horneado en panaderías comunitarias; las verduras y frutas provistas por un quintero conocido. Son situaciones deseables, que se hacen posibles apenas se toma decisión de concretarlas a nivel político y de la sociedad que respalda ese político.

El tercer elemento conceptual es consecuencia de asumir las dos ideas anteriores, porque si se admite que lo local es posible y que buena parte de las demandas comunitarias se pueden atender con recursos locales, se pasa a tomar el aprovechamiento de los recursos naturales que se tiene a mano con otro criterio. Surgen así proyectos como la elaboración de tintes naturales en polvo o el manejo sustentable del monte nativo aprovechando la cultura de los pueblos originarios. Esto es: deja de esperarse al inversor externo salvador o de pensar en la inauguración de la gran planta industrial como símbolo de la dinámica de una región y además como única salida. Se buscan –y se encuentran– nuevas actividades orientadas al mercado ampliado, donde lo local aparece con ventaja o ni siquiera: es imprescindible.
Hace unos años escuché fascinado a una docente de Catamarca contar cómo les pedía a sus alumnos que recogieran malezas en el camino entre su casa y las aulas, para luego examinar sus virtudes terapéuticas. Esa maestra ejemplar de la medicina natural representaba un hito en la resistencia cultural frente a la presión que nos convierte en consumidores de bienes pensados y manufacturados por otros en lugares distantes, que marcarán día tras día nuestra incapacidad por atendernos.

La producción popular es, entonces, un tránsito. Es el camino que lleva desde una sociedad consumidora y en buena medida ignorante de lo que consume, a una sociedad productora, con todos los vínculos de conocimiento, colaboración y solidaridad que se requieren para una participación plena en ese escenario.
No tiene nada que ver –como algunos creen y sostienen– con una actitud asistencial. En todo caso, la producción popular asiste a la calidad de vida general, a la justificación de nuestro trabajo. Deliberadamente, los primeros aportes de esta serie de notas han puesto énfasis en soluciones técnicas de sentido común, sin desafiar explícitamente la cultura política vigente como condición para su implementación. En las notas futuras nos iremos acercando a la posibilidad de contestar una pregunta básica: si los planteos son de sentido común, ¿por qué no se implementan?

Sin duda, la tarea no puede ser considerada satisfactoria si esa pregunta no tiene una contestación razonable, porque no es nuestro objetivo exponer escenarios simpáticos de realidades utópicas, sino arrimar el bochín para que se concreten. Cada semana buscaremos un poco más de luz sobre un tema ineludible.

EL MITO *DE LA COMPETITIVIDAD*

La hegemonía cultural de la economía de mercado se refleja en la instalación de algunos conceptos que resulta casi tabú eludir o contradecir. Uno de ellos es la vigencia de la competencia entre oferentes para atender al consumidor y la necesidad de ser competitivo, esto es: tener elementos para triunfar en esa puja. El término se utiliza a todo nivel, desde el comercio internacional hasta el pequeño negocio barrial.

Hace un año, en la ruta entre Cachi y Cafayate, en Salta, en medio de una maravillosa quebrada con mil colores y formas, pero sin un ser humano a la vista por kilómetros, aparecieron de golpe dos artesanos ceramistas, vendiendo sus hermosos objetos color pizarra debajo de un algarrobo. Al momento de pagar quedó claro que no trabajaban juntos. Competían. Uno agregando un sutil trenzado en las asas de los jarritos; otro con una vieja llama para fotografiar. Cada cual con su recurso. Un poco más adelante, junto a la ruta, estaban sus casas, las únicas dos construcciones hasta donde se perdía la vista. Estaba claro que la conveniencia económica más elemental era para ellos acordar los productos y los precios. Sin embargo competían. Esta situación, planteada en un caso límite, se da con mucha frecuencia en ámbitos donde el que ofrece sus productos cree que está en inferioridad de condiciones respecto del comprador y sobre todo que no hay lugar para todos, que alguno debe perder.

Sin embargo, esa no es la situación en el escenario de producción de la enorme mayoría de los bienes básicos que la comunidad necesita. En alimentos como la leche o los pollos, el productor primario forma parte hoy de una cadena dependiente del industrializador, sin casi ningún grado de libertad. Si opta por industrializar a una escala familiar, en las actuales condiciones de la economía, se pone en la mochila un problema descomunal de comercialización sin solución, salvo que el Estado regule el comportamiento de los actores. En consecuencia, cuando aquí se habla de buscar la competitividad internacional de la leche en polvo o de los pollos eviscerados, el reclamo va hacia la industria, que tiene como variable de ajuste lo que paga a los tamberos o a los galpones integrados, respectivamente. Se habla de competir, pero en realidad se traslada la carga a los más débiles en la cadena. No se hacen grandes reuniones para discutir la eficiencia global, con una retribución justa para cada eslabón. No. Simplemente, se embroma al más débil.

Con diversos matices, esa mutación de la competencia, que no es competir sino sojuzgar, aparece también en cadenas de tecnología más compleja. La industria automotriz, por ejemplo, ya no es representada por grandes industrias terminales que compran cada pieza del auto y luego arman el rompecabezas en una enorme línea de producción y ensamblado. En aquella situación, muy lejana ya, cada proveedor de cada arandela o cada resorte competía con un par, por precio y calidad. Hoy las terminales han aumentado su poder de negociación a través de reducir la tarea final a un ensamblado de subconjuntos (reciben el motor, los frenos, la electrónica y similares, en buena medida ya armados) y han disminuido sustancialmente el número de sus proveedores, generando relaciones estratégicas con sus proveedores de subconjuntos. En buena parte de los casos, intervienen en el capital de esas empresas. El concepto de competencia por proveer a una terminal se ha evaporado. En rigor, esta administra un sistema donde define sus costos y los de las empresas dependientes. En el mejor de los casos, la competencia se establece sólo entre filiales de la misma corporación en distintos lugares del mundo, para ver dónde se ensambla un auto. Es lo mismo que hacía la mítica IBM cuando ejercía el monopolio del equipamiento informático hace 40 años y obligaba a las filiales a competir entre sí para asignarle el paso final de la manufactura de algún equipo, pero mantenía en su planta matriz todos los procesos de alta tecnología.

La recomendación es: cuando escuchen reclamar competitividad, quienes crean en la producción popular deberían preocuparse, y tratar de cambiar el lenguaje. Se puede discutir eficiencia o productividad de cualquier actividad, en conjunto con la distribución de los frutos de esa mejora. Pero todos los actores de cadenas de valor en que su producto lo recibe otro industrial o algún intermediario comercial, deben saber que la búsqueda de la llamada “competitividad” de corto plazo –sobre todo cuando se refiere al comercio exterior– lleva aparejada que embromen al más pequeño, al más frágil. Muy diferente sería la situación si el que agrupa la oferta –el industrializador de leche o pollos o incluso la terminal automotriz– fuera un actor sin vocación de extraer renta de sus proveedores, como sería una cooperativa de productores primarios o una organización regulada por el Estado. Allí se haría realidad que mejorar la productividad global genera un beneficio compartido y hablar de competitividad internacional no produciría urticaria.

LA LEY *HACE LA TRAMPA*

El crecimiento de la producción popular tiene un primer obstáculo conceptual que es instalarse en la subjetividad de quienes deben ser sus actores, sea del lado de la oferta o de la demanda. Ellos deben pensar la relación con la tierra y la manufactura de otra manera, en lugar de asumirse como consumidores llanos, instalados frente a grandes estanterías de las que extraen cómo satisfacer sus necesidades en función de la cantidad de dinero que tienen en su bolsillo y nada más.

Supuesto lograr dar ese paso y contar con suficientes compatriotas convencidos, después están las regulaciones económicas, bromatológicas y de todo tipo, que han sido definidas con la imagen del mercado como ordenador de nuestras vidas y en la gran mayoría de los casos con la participación activa de las corporaciones ganadoras del sistema actual. Estas normas no son tan importantes por lo que dicen, ya que es improbable encontrar limitaciones explícitas a la actividad de la producción popular. Son más importantes por lo que no dicen, habilitando de tal forma la construcción de escenarios donde las pequeñas unidades,

sean familiares, personales o cooperativas, prácticamente no se pueden desempeñar.
En la primera nota de esta serie señalamos los problemas de la agroindustria familiar, productora de dulces o encurtidos, que si trabaja en la provincia de Buenos Aires debe hacer sus trámites de inscripción solo en La Plata y cada trámite debe ser modificado si cambia el más mínimo ingrediente. De allí surgen las habilitaciones municipales precarias, que llevan a los productores a vender en infracción, así sea en el municipio vecino.
Agreguemos otros ejemplos. Si un ganadero quiere llevar a faenar su hacienda gorda en un matadero zonal, debe inscribirse en ONCCA, una dependencia del Ministerio de Agricultura, como matarife carnicero. Eso lo habilita a llevar hasta 50 cabezas mensuales, que luego las debe vender en carnicerías propias. O sea: la reglamentación lo obliga no sólo a tener carnicería –cuando podría tener un acuerdo con uno o más minoristas– sino a faenar un volumen menor al que trabaja cualquier comerciante medio. Tiene la opción de inscribirse como matarife abastecedor, que es la figura del intermediario por antonomasia, que lo habilita para faenar hacienda propia o de terceros, para el consumo nacional o externo. No sólo es mayor el costo, sino que en ambos casos necesita la aceptación expresa del establecimiento faenador, como parte de la documentación a presentar. Dada la densa trama de intereses vigente en el sector, con mucho entusiasmo y tesón un productor podría conseguir que el matadero lo acepte como matarife carnicero –lo cual por lo dicho no le sirve para casi nada– pero, a la inversa, es seguro que no lo aceptaría como matarife abastecedor, desplazando a otros que ya están establecidos.
Resumiendo: en lugar de considerar al matadero como un servicio público, al cual cada uno puede recurrir pagando la faena, las normas vigentes le dan al matadero la llave para decidir quién es matarife y quién no. El resultado es que los productores que faenan y entregan a carniceros son la excepción –como se señaló en la tercera nota de esta serie– y de ninguna manera la regla.
Otro caso: la producción de biodiesel. Este combustible puede ser obtenido sin grandes secretos técnicos en plantas pequeñas, que pueden abastecer las necesidades del propio productor del grano o incluso de regiones alejadas de los puertos, con grandes beneficios. La operación, sin embargo, implica el manejo de un material inflamable como el metanol, lo que permite afirmar que la seguridad debe ser regulada e inspeccionada, para aprobar una planta de cualquier dimensión. Sin embargo, la reglamentación –que data de 2008– es adaptación de la vigente para procesamiento de petróleo para grandes unidades. Las normas de calidad, por su parte, son las definidas para la exportación a Europa. Nada hay estipulado –ni en seguridad ni en calidad– para plantas pequeñas y por lo tanto ninguna planta así está inscripta en la Secretaría de Energía. La producción para autoconsumo está mencionada en la ley de biocombustibles pero nadie la promueve en concreto. Se realiza, pero sin normas de seguridad ni calidad para rendir cuentas y además sin poder vender un litro de biodiesel a terceros. Lo mismo vale para las plantas municipales de biodiesel a partir de aceite de frituras recuperado, cuyo producto sólo puede tener como destino el uso en vehículos oficiales.
Podría haber más productores de plantas pequeñas seguras para biodiesel. Podría haber más –muchos más– fabricantes locales de biodiesel, sobre todo en NOA y NEA, que tantas fuentes de trabajo necesitan. La ley, hecha y reglamentada pensando sólo en un escenario de grandes corporaciones exportadoras o que suministren biodiesel a las empresas distribuidoras de combustible en gran escala, no conoce, no ve, no habilita esos actores.
Hay más y más casos. Cualquier curioso podría llamar al Centro de la Industria Lechera (CIL), cámara que agrupa a las grandes empresas lácteas y preguntar qué opinan allí de la posibilidad de procesar leche en pequeña escala. Después me cuentan. Cuando el mercado ordena la vida, el refrán conocido y tradicional suele cambiar de sentido. Es la ley la que hace la trampa.

12 de Junio de 2014

LO PÚBLICO
LO PRIVADO Y LO COMUNITARIO

Una discusión básica en toda sociedad moderna, en que el capitalismo es el sistema económico dominante, es cómo se atienden las necesidades básicas de la comunidad. La educación, la salud, la seguridad social, entre varias otras facetas, son admitidas como necesidades fundamentales. Todos esos planos están sometidos a tensión permanente para discernir quién y cómo se hace cargo del tema y si se lo hace con vocación de servicio o priorizando un negocio. En los temas mencionados se llegó a un consenso mayoritario que establece que es el Estado, como administrador de la sociedad, quien debe hacerse cargo de brindar los servicios. Las ineficiencias en el manejo de lo público, sumadas al deliberado deterioro producido cuando sectores opuestos a esta tesis se han hecho cargo del gobierno, han hecho aparecer ámbitos privados para brindar esos servicios esenciales. La educación privada, la medicina prepaga, las AFJP, representan modos diversos de expresión de esta tensión entre el servicio y el negocio. El conflicto es permanente y la mejor expectativa es controlar cuidadosamente el rumbo, para alcanzar una adecuada satisfacción general.

La alimentación, la vestimenta y la vivienda son necesidades básicas, pero entran en otra categoría social. Eso es así porque a pesar de haber constituido cuestiones críticas en toda la historia de la humanidad, en los últimos 200 años el capitalismo ha ganado la batalla cultural y todas esas necesidades son atendidas con la lógica de la

economía de mercado, cuya consigna es: si tienes dinero comes, te vistes y te cobijas; de lo contrario, buena suerte. Se han mercantilizado estas demandas sociales y, en el mejor de los casos, se admite que el Estado acuda en asistencia precaria de quienes no tienen la llamada demanda "solvente".

Son una necesidad. A consecuencia de ello, antes y después de la famosa frase de Evita: "donde hay una necesidad hay un derecho", distintos ámbitos internacionales han llevado los temas a la categoría de derecho, pero nadie ha resuelto cabalmente que sean ejercidos en plenitud.

En este escenario, la agricultura familiar (AF) aparece como un espacio que necesita clasificación más precisa que la actual. Si es un sector para el cual reivindicamos el derecho a trabajar y participar del mercado capitalista estándar de la alimentación, lo planteamos como un negocio. Si es un negocio su destino no es optimista, dada la dependencia de la industria y sobre todo del comercio en cada cadena de valor, con actores de muy superior poder económico a cada agricultor aislado. Se puede aspirar a subsistir, pero salvo excepciones, el horizonte no es de progreso importante y aparece casi mecánicamente una función asistencial del Estado.

Si por el contrario, advertimos que tomar la alimentación como un derecho es una asignatura pendiente, la AF debe ser considerada un componente clave para ejercer ese derecho, equivalente al papel que cumplen la escuela o el hospital públicos. Hay diferencias instrumentales pero no conceptuales. En la educación o la salud se organiza la tarea como un servicio público, con la responsabilidad integral del Estado. En la alimentación, los actores son ciudadanos individuales o colectivos, con decisiones propias, pero que culturalmente deben aspirar –la gran mayoría ya aspira, pero el sistema los bloquea– a brindar los alimentos necesarios y conseguir a cambio de ello una retribución que les permita una vida digna. Nada demasiado diferente de la aspiración de un buen docente o un buen médico o enfermera del sistema público. Nadie en la AF sueña con vender hoy 100 frascos de mermelada; mañana contratar empleados para hacer 1000 y luego armar una sociedad anónima para hacer 100 mil y poner el lucro como objetivo central. La diferencia es que a un maestro, el salario se lo paga el Estado y a un agricultor los ingresos se los deben proveer los consumidores de sus productos.

Mirado así, el Estado que busque concretar el derecho a la alimentación debe construir la infraestructura económica y social que permita trabajar a la AF con óptima productividad y que ponga los bienes que genere cara a cara y con facilidad frente a los consumidores. Eso no es lo que se ha hecho en Latinoamérica hasta el presente, sino lo contrario: empujar a los AF para que se metan en un sistema económico cuyas reglas los sojuzgan o los vuelven a expulsar.

Hay un actor adicional para el cambio, aparte de la decisión estatal de mirar el tema de otra manera. Son los consumidores. Toda persona atenta a los placeres sensoriales, cuando visita una feria de la AF se va envuelta en aromas y sabores de especias, de mermeladas donde la fruta está allí como recién cosechada de la planta, de embutidos hasta ignorados. Si es sociable habrá preguntado cómo se hace un dulce de sandía o de cayote o un pan con chicarrones y habrá recibido una explicación de sus autores o autoras. Entrecerremos los ojos, que es la forma de recordar un aroma. ¿No nos gustaría tener esa sensación una vez por semana en lugar de una vez por año en el mejor de los casos? De todos nosotros depende.

26 de Junio de 2014

LA PRODUCCIÓN POPULAR *Y LA CLASE MEDIA*

En esta serie hemos buscado superar la imagen de la producción popular como un tema asistencial en la agenda pública, vinculada a los alimentos, la indumentaria y poco más, manufacturados y distribuidos por canales informales, que de algún modo ayudan a ir tirando. En el sector lácteo, en panificados, en algunos servicios públicos ligados al cuidado del ambiente, así como en varios otros rubros de satisfacción de las necesidades cotidianas, hemos insistido –y posiblemente demostrado– la factibilidad de producción eficiente y de calidad, a escala local, con una mejor distribución territorial que la que induce el capitalismo concentrado funcionando en automático.

Cabe ahora ampliar la mira. Desde la periferia del mundo se ven y se sufren los efectos dolorosos de la concentración incesante en la cúpula de los negocios globales. Eso provoca el daño más importante de los varios que se podrían enumerar: la quiebra de la sociedad en dos fracciones principales, una de las cuales queda fuera de todo horizonte de progreso. La exclusión, sin trabajo ni ingresos, hace que grandes masas del mundo vean como una perspectiva de mejora ingresar a ámbitos de explotación, donde al menos trabajan, aunque con ingresos insuficientes para una vida digna.

Quienes realizamos una tarea política y social ocupados –hasta obsesionados– por mejorar la condición de esos compatriotas solemos pasar de largo por los cambios que se producen al interior del espacio de los incluidos. Muy tibiamente en nuestros países, pero con mucha fuerza en el mundo central, se están desarrollando procesos poco o mal analizados, pero muy importantes, vinculados a la democratización casi absoluta de las comunicaciones personales y grupales; a la generación distribuida de energía, que pone ese recurso al alcance de los individuos, para producir la energía que consumen; a la posibilidad técnica aún por descubrir que ofrecen las impresoras 3D; a los sistemas de financiación de proyectos de particular a particular que han aparecido desde 2008. Cada uno de esos ámbitos, comunicaciones, energía, manufactura, finanzas, por extensión la comercialización, han tenido cambios tecnológicos que resquebrajan y hasta eliminan la necesidad de contar con grandes inversiones concentradas para poder trabajar. Quienes hacen uso de esas oportunidades, como es lógico, son las nuevas generaciones de clase media acomodada, egresados de los centros educativos más importantes e insatisfechas con un mundo de holguras económicas pero poca o ninguna justificación ética.

La pregunta que vale la pena hacer –entre varias que el tema sugiere– es cuánto de ese nuevo movimiento sirve para construir puentes que devuelvan dignidad a población postergada. Jeremy Rifkin, en su último libro, da el ejemplo de un joven hindú egresado de la Universidad de California y vuelto a su patria, que construyó una red eléctrica en base a energía solar para un

poblado de 200 familias. Este proyecto se hizo famoso porque fue el único lugar que quedó con energía en ocasión de un gigantesco apagón que dejó a oscuras a 700 millones de hindúes. Gracias a esa publicidad, el gobierno hindú está apoyando al joven emprendedor para replicar la red hasta llegar a 100 mil personas y luego darle otro salto de cantidad.

Mientras por aquí luchamos con buitres que parece quisieran tomar hasta nuestro aire, en la parte de arriba del mundo rico se construyen conceptos e instrumentos liberadores de la necesidad del gigantismo, aunque todavía no han demostrado ser dignificadores del conjunto de la ciudadanía. No estaría de más, en tal caso, que parte de las nuevas generaciones aplicadas a la política, la sociología o la economía, por estas playas, conozcan la historia de Zopa, Lending Club, Prosper y tanto otros ámbitos de financiación directa de proyectos. Zopa ya ha viabilizado, en Inglaterra, proyectos por más de 700 millones de dólares. Kickstarter, una compañía que trabaja moviendo el dinero a través de Amazon, ha evaluado más de 50 mil proyectos, financiado más de 20 mil y conseguido aportes para ellos por más de 800 millones de dólares. Ya no son encuentros de diversión o fantasmas fugaces.

En un plano más teórico y sólo como parte de la vasta temática pendiente, Elinor Ostrom, la única economista mujer ganadora de un premio Nobel, que falleció en 2012, dedicó décadas, con mucha gente, a estudiar el gobierno de los bienes comunes, idea que está en la base de buena parte de las alternativas que no van al embudo de la concentración global. Su libro "El gobierno de los bienes comunes", publicado en 1990, fue traducido al castellano en 2000 y se puede leer íntegro en Internet. Sin embargo, en Argentina sus ideas casi no se conocen o difunden, salvo en algunos ámbitos de universitarios, como Buenos Aires, Río Cuarto, General Sarmiento, o pocas otras.

El puente necesario, hacia la democratización de la economía, hacia la producción popular de contenido amplio, aún no tiene siquiera cimientos terminados.

EL FINANCIAMIENTO *ENTRE PARES*

Hacer un esfuerzo por construir escenarios donde la producción popular pueda consolidarse, sin tener claridad sobre la forma de financiación, nos deja dependientes de la buena voluntad estatal de definir una normativa útil al efecto o, de lo contrario, nos hace transitar por la utopía sin destino.

Un conjunto de normas públicas, efectivamente, es imprescindible. Resumiendo el status actual, podemos decir que disponer de un patrimonio sigue siendo condición esencial para conseguir un financiamiento. Esa lógica enteramente hegemónica ha condicionado a su vez el perfil de los evaluadores de crédito del sistema bancario, que son más o menos expertos en evaluar garantías físicas y más o menos inútiles para discernir si un proyecto tiene factibilidad de supervivencia técnica y económica. En tal marco, un proyecto de un grupo sin antecedentes bancarios ni propiedades a su nombre, directamente no tiene acceso a ventanilla alguna. Ni qué decir si, además, la edad promedio de los participantes es menor de 30 años.

No son sólo los jóvenes los que quedan fuera de carrera. Las cooperativas organizadas alrededor de empresas quebradas deben soportar infinitos trámites legales para llegar a tener una escritura que les legitime la propiedad de los bienes de producción. Hasta que eso sucede –hay gente trabajando más de una década en esa condición– la cooperativa no es sujeto de crédito. Así, termina siendo financiada por

sus clientes, con el total deterioro de su capacidad de negociar precios y condiciones por los bienes que entrega.
En el mundo desarrollado aparece un fenómeno al cual es importante prestar atención. La omnipresencia de internet y todo tipo de redes sociales, a la vez que la disponibilidad de información fluida sobre la conducta de las personas como tomadores de créditos para consumo, ha permitido a numerosos grupos incursionar en una actividad que para la periferia no deja de parecer un juego para los niños ricos que tienen tristeza, como glosaba Carlos Menem.
En efecto, ha aparecido una importante oferta de financiación privada no usuraria para personas que quieren expandir su consumo sin recurrir a un banco; o para personas -o grupos- que quieren llevar adelante un proyecto, con diferentes modalidades de implementación.
El caso más simple es el de portales que ofrecen un interés a quien presta y cobran un interés a quien toma crédito, con una simple diferencia de comisión para el portal. Usualmente quien presta recibe una renta claramente mayor que la que pagan los bancos del mundo central y aun así el tomador paga una tasa menor a la bancaria. Además, el plazo de pago se establece caso por caso, lo cual resuelve el problema financiero de tomar dinero a corto plazo y prestarlo a mediano.
Otra modalidad es publicitar un resumen del proyecto de inversión y los interesados suscriben cuotas del préstamo necesario, caso válido especialmente para préstamos de mediano porte a empresas en funcionamiento. Una más pasa por una evaluación previa del portal y a partir de allí se busca la oferta de interesados, que ya cuentan con una mirada positiva de quien difunde la solicitud.
Las cifras que ya están en juego son importantes. Zorba, el principal actor del tema en el Reino Unido, ha movilizado más de 500 millones de libras esterlinas. Kickstarter, portal norteamericano promotor de préstamos para iniciativas artísticas y educativas, ha superado los 800 millones de dólares. Muchos otros casos pueden conocerse haciendo búsquedas de “peer to peer lending”.
En Argentina hay solo un portal con algunos años de subsistencia en el tema. Se trata de una copia casi exacta de Kickstarter, llamada Idea.me, que tiene una ampliación temática para emprendimientos sociales, pero que aparentemente es poco relevante.
La otra modalidad de financiación no bancaria, son los fideicomisos, donde se convoca socios para actividades transitorias como construir un edificio o la siembra y cosecha de granos, pero se alejan de la idea de financiación de actividades productivas permanentes.
Para pobres con buenas ideas, casi nada. En el mejor de los casos, remedos del insólitamente elogiado Banco de los Pobres hindú, a tasas de explotación, inconcebibles, sobre la supuesta base que es lo único que se puede ofrecer.
Una vez más el Estado y tanto innovador social interesado, tienen la asignatura pendiente de tomar experiencias ajenas, esta vez para poner imaginación y canalizar ahorro privado, vinculándolo con proyectos sociales en forma directa.
El financiamiento entre pares es un concepto excelente, que debe transitar hacia el mundo periférico, con la paciencia de no negociar el fin: poner equidad en la producción popular. Hay miles de millones de dólares aplicados ya de este modo por el mundo, utilizando la tecnología de comunicación virtual y sobre ella, formas de pago y cobro seguros. Nos falta la decisión.

ECONOMÍA CIRCULAR: *OPORTUNIDAD O TRAMPA*

18 de Julio de 2014

La necesaria preocupación por el ambiente, en un mundo que consume más recursos naturales de los que genera, llevó a definir un término referido a la producción industrial muy seductor: la economía circular. Esto es: se trata de diseñar sistemas productivos sin efluentes descartables, en que todo lo que sea subproducto del bien principal tenga un uso alternativo y, además, en que el diseño de los bienes durables –autos, televisores– permita el fácil recambio de piezas y/o la reutilización de los componentes cuando el equipo llegue al fin de su vida útil.

Los avances en el tema surgieron en la Unión Europea, a consecuencia de una legislación como la de los residuos electróni-

cos de 2005, que obliga al productor de un bien de ese sector a recibirlo en devolución cuando se agote su prestación o simplemente cuando se lo cambie por otro más moderno. Se buscó así –entre otras muchas medidas– asegurar el reciclado o al menos evitar la disposición final en cualquier espacio contaminante. Una legislación enérgica y dura, a su vez, consiguió que las empresas pasen a pensar la mejor forma de ubicarse en los nuevos escenarios.

Vodafone, por caso, ofrece teléfonos que se pueden actualizar sin costo al año, con devolución del anterior, o los alquila, con actualización automática al año. De tal modo, cumple con la ley y fideliza al cliente. Renault alquila las baterías para autos eléctricos; fabricantes de alfombras entregan las suyas en leasing, cambiándolas regularmente cuando se gastan; o una empresa holandesa de jeans (Mud Jeans) los alquila por un año, al cabo del cual se los puede devolver y comenzar de nuevo. Los conocidos nuestros -marcas líderes de notebook-, Dell y Lenovo, están diseñando los componentes críticos de modo que sea fácil remplazarlos y ya venden los repuestos pertinentes, evitando tener que descartar un equipo por un chip.

En todos los casos, las corporaciones consiguen un resultado positivo en términos ambientales, junto con una mayor pertenencia de sus clientes a un universo controlado por ellas. Hasta en el caso de los viajes compartidos en automóvil, en que una firma pequeña (Zipcar) instaló un modelo exitoso, irrumpieron Mercedes Benz, BMW y Ford, con programas de alquiler temporario de vehículos, para uso compartido.

Hay otros casos más sofisticados y que implican el desarrollo ampliado de actuales cadenas de valor. Starsbuck está desarrollando en Japón un proceso para transformar la borra del café en ácido succínico, materia prima para plásticos biodegradables. O Green Cup Coffee, en Estados Unidos, transforma esa borra en fertilizante. O Puma, firma alemana de indumentaria, que recibe todo descarte de ropa, y utiliza el material para vestimenta certificada como de material reciclado.

Se podría seguir agregando ejemplos un largo rato. Siempre se trataría de situaciones que aún no se dan en nuestro país, porque nuestra sociedad transita por una etapa previa al nivel de conciencia necesario para ello, tanto a nivel institucional como de los consumidores o fabricantes.

El punto a analizar en profundidad, sin embargo, es como se resuelve el dilema entre el cuidado del ambiente, con la consiguiente diseminación del concepto de economía circular, respecto de la paralela necesidad nacional de reducir el peso hegemónico de las corporaciones multinacionales, que la economía circular parece aumentar. Desatar este nudo gordiano es un tema no menor a agregar al menú de cuestiones pendientes en nuestra estructura productiva.

Hay una solución casi obvia a nivel teórico: tomar la iniciativa ambiental desde las instituciones públicas y comprometer a la comunidad explícitamente en el problema. Sí, parece que es lo que hay que hacer. Para eso, no obstante, hay dos tareas casi titánicas por delante. Primero, adoptar un paquete legislativo mucho menos permisivo en materia ambiental, soportando las presiones que por caso evitaron hace algunos meses que se aprobara una legislación sobre residuos electrónicos similar a la europea. Segundo, incursionar en campos regulatorios vírgenes, para promover iniciativas nacionales de reuso, reciclado, reparación o utilización innovadora de residuos industriales, que puedan ser implementadas en forma independiente de la voluntad y del control de filiales de corporaciones multinacionales. Se puede y debe trasladar tecnología del mundo central a estos escenarios, sin caer en la integración automática a una red corporativa y sin repetir experiencias indeseables, como la recuperación de metales de residuos electrónicos en China o India, que se hacen en condiciones infrahumanas.

Asociar el cuidado del ambiente a la generación de trabajo digno y a formas originales –para la Argentina– de vinculación de productor con consumidor, desde el diseño original hasta el manejo de los residuos, es fuente potencial de trabajo popular para centenares de miles de compatriotas. Se puede.

LOS ACTORES SOCIALES *CON MIEDO ESCÉNICO*

Todo Estado de Bienestar tiene un desafío divisible en dos etapas: primero contener, ayudar a los necesitados o excluidos y luego tratar de incorporarlos a algún escenario donde puedan lograr una calidad de vida digna a partir de su propio esfuerzo. En la primera fase la iniciativa y la responsabilidad queda casi íntegramente en manos del Estado. Los asistidos sólo deben demostrar que cumplen con las condiciones planteadas para recibir el apoyo.

Foto: Mariano Martino

En la segunda, ya la cosa es diferente.
Los programas más tradicionales de inclusión, desde el primer tercio del siglo pasado, apuntan a corregir reales o supuestas deficiencias para que los compatriotas puedan cumplir con los requisitos técnicos que los empresarios -dadores de empleo- establecen. Los centros de formación profesional, las becas para escuelas técnicas o universidades, el más reciente concepto de tecnicaturas o diplomaturas en temas más específicos, todo va en la misma dirección: vestir a los postulantes para que quien elige, los apruebe.

Como acotación al margen es llamativa la poca importancia que tiene en ese escenario la capacitación para entrar a trabajar en el Estado. Eso es fruto combinado de pobres o inexistentes criterios de selección, sumados a la poca definición estratégica de muchas de las funciones de los servidores públicos. No hay espacio aquí para profundizar esto y se lo verá en otra nota. Vuelvo.

Como alternativa a ser empleado, el Estado normalmente les plantea a los asistidos que trabajen por su cuenta, en grupos la gran mayoría de las veces y en forma individual, por excepción. ¿Para hacer qué? Para desarrollar proyectos que ellos piensen, que los integren a algún mercado, sea de alimentos, de indumentaria, de la construcción, por mencionar los más habituales. Ese intento comenzó con programas financiados por el Banco Mundial en la década menemista y luego se prolongó, con pequeñas variantes en lo técnico, pero con una gran diferencia administrativa: como el número de personas asistidas aumentó sideralmente, existen más mecanismos de control para verificar que quienes dejen de necesitar el subsidio –que trabajen regularmente– dejen de cobrarlo.

Y los compatriotas se asustan... Pasaron de la desesperación de los '90 en que llenaban cualquier formulario, a sabiendas de que nunca podrían vender decentemente las prendas que a lo mejor podían llegar a producir, a vacilar ante la posibilidad de asumir un riesgo y perder la media canasta básica que hoy pueden tener segura. Crece la economía invisible, la de la changa con nula tecnología. Crece la economía donde el empresario pyme toma un beneficio de la necesidad de su empleado de trabajar en negro. Se complica el cambio de escenario. Transformar a un compatriota en emprendedor o que forme parte de un grupo emprendedor –sea cual sea su nivel de formación técnica– es un desafío bien complejo. Si se trata de que se sume a mercados de funcionamiento capitalista tradicional, no sólo es imposible, sino que probablemente sea una traición moral. Sumar emprendedores a competir como furgón de cola en una economía tan concentrada y con tendencia a más y más, es simplemente convocar a la auto explotación. Francamente, está bien que los compañeros no vean claro ese camino.

El camino viable -aunque duro- es organizarse para atender demandas sociales necesarias, cambiando el sentido del trabajo. Eso implica producir alimento o vestimenta para atender una población determinada o un sistema de abastecimiento público preciso; cuidar el ambiente y remediar los daños que ya se han cometido; diseminar sistemas de energía renovable; definir un real y universal plan de viviendas populares para producir las millones de unidades faltantes. Esto es: construir ámbitos de trabajo para satisfacer necesidades, donde la retribución de quienes atienden esas demandas sean un medio y no el motivo principal.

Aun así es de esperar que a los compatriotas les cueste dar el salto. Necesitan asistencia técnica; colaboración para fortalecer los grupos; mayor seguridad que la de un empresario estándar respecto de la demanda futura de sus productos o servicios. Es el dilema que tiene un Estado moderno. O profundiza los subsidios, que alcanzarán malamente para una parte de los ingresos familiares. O arma un esquema de "trabajo cuidado", donde entre todos creamos un concepto nuevo, el del trabajo para bien de la comunidad, que a la vez deja vivir bien a quien trabaja.

No hay de quien aprender. Sólo se podrá relatar los fracasos de países amigos y los propios. Pero la producción popular aparece con nitidez como el camino de superación de las limitaciones de un sistema capitalista en que cada vez menos personas son dueñas de mayor porcentaje del patrimonio total, sin siquiera haber participado en su generación.

Todo lo antedicho no es sólo fruto de la reflexión. Es también producto de intentos de asistencia técnica en la base social cuyos detalles no es pertinente difundir, porque harían daño a los protagonistas. De esas experiencias va naciendo de a poco la luz. El trabajo para la comunidad como etapa superior del empleo alienante aparece como una posibilidad real y enteramente recomendable.

ADEMÁS DE EMPLEO, *HAY OTRO TRABAJO*

En esta serie presentamos la producción popular como un concepto que va tomando forma a través de reflexiones teóricas y, a la vez, de la descripción de escenarios de la realidad productiva nacional. El hecho sobre el que más énfasis hemos puesto es priorizar la relación entre los bienes generados y la atención de demandas socialmente necesarias. El lucro deja de ser visto como un objetivo excluyente, ni siquiera el prioritario. La meta central es atender los pedidos de la comunidad y la retribución por ese servicio debe asegurar un ingreso digno a los trabajadores, además de la reproducción del ciclo de manufactura y las inversiones. Esto no emerge de un reglamento o cosa parecida alguna. Es un valor social, el mismo que aplican, sin ninguna reflexión teórica sofisticada, tantos centenares de miles de mecánicos en su taller, alambradores rurales, peluqueros y decenas de oficios más, pero que se ve fagocitado por el pensamiento hegemónico del capitalismo concentrado apenas busca extenderse a actividades más complejas, donde convergen muchos trabajadores por unidad.

Cuando el gobierno nacional decida promover integralmente el trabajo y no sólo el empleo en relación de dependencia, tendrá que caracterizar la diferencia entre una y otra mirada, lo cual llevará a reconocer la existencia de un universo de ciudadanos, cuya meta no es extraer plusvalía de otros o, a la inversa, defenderse de ese intento. Al transitar por ese descubrimiento se abren una serie de posibilidades hasta ahora no exploradas en ámbito alguno de la política social argentina.

No sólo quienes brindan servicios personales -como las categorías arriba mencionadas- sino también quienes extraen y/o

transforman un recurso natural, o quienes recuperan y reciclan residuos urbanos, entre otros muchos, no encuadran en el tratamiento que hoy se le da al trabajo. El hachero del Impenetrable chaqueño que hace postes de quebracho, la artesana wichi que elabora el chaguar, una cooperativa que recupera, muele y lava plástico, son emprendimientos que tienen mucho más en común de lo que parece. Todos ellos, y muchos más similares, son el primer eslabón de cadenas de producción de bienes finales, que agregan valor a lo que suministra la naturaleza o el ambiente, pero no a expensas de utilizar trabajo asalariado de terceros, sino por aplicación de saberes técnicos y organizativos propios. Esas tareas pueden requerir crédito o capacitación para consolidarse, pero más que eso -mucho más- necesitan protección de la expoliación a que los someten los eslabones siguientes, donde ya el lucro es el fin excluyente.

Un hachero produce postes con su hacha y su habilidad transmitida por generaciones, pero a continuación el quebracho queda en el medio del monte, a decenas o centenares de kilómetros de una ruta. Basta que alguien disponga de un tractor o camión con acoplado para sacar esa madera, para que tome, a su favor, casi todo el valor generado por el trabajo del criollo. Cualquiera que transite por Taco Pozo o localidades cercanas del Chaco podrá ver montañas de postes en estaciones de servicio, esperando que se concrete la primera de la imaginable larga cadena de reventas hasta llegar a un campo de la pampa húmeda. Lo mismo pasa con los típicos morrales wichi o con el plástico enfardado o con los cabritos mamones o la cebolla santiagueña. Y podría seguir largamente. La actividad que genera el primer paso y le da sentido a toda la cadena -que sin ella no existiría- no tiene protección alguna dentro de las reglas de mercado. Ninguna de las normas que promueven el empleo ayuda a estos compatriotas a sacar la cabeza fuera del agua.

Lo mejor que le puede suceder a una sociedad ávida de justicia social es incorporar una sensación de protección generalizada de estos espacios laborales. No es una protección a la ineficiencia lo que se necesita, como suelen quejarse los más conservadores. Es algo muy distinto y hasta hoy desconocido. Es impedir que el afán de lucro invada los escenarios donde los compatriotas brindan servicios o producen bienes necesarios para la comunidad, con la única expectativa de un ingreso familiar adecuado. Si se aplicara ese criterio con rigor, cuando las terminales automotrices incursionan en el mantenimiento de vehículos, deberían pagar un impuesto especial. O un hachero o una cooperativa de reciclado o los productores de cabrito o de cebolla en pequeña escala, deberían tener ámbitos locales de primera compra a precio justo, que sean los que luego negocien en la selva capitalista. No es para nada difícil implementarlo. Si se establecen las pautas, las cooperativas eléctricas de todo el país podrían ser los entes ejecutores de estos puentes desde el servicio hacia el lucro y se podría disponer de normas crediticias impositivas y crediticias muy simples para que eso suceda. En realidad, lo difícil es salir del laberinto de creer que el buen trabajo es sólo el que se hace para un patrón.

28 de Agosto de 2014

LA PRODUCCIÓN POPULAR *Y LA JUSTICIA SOCIAL*

Tiempo Argentino publicó una serie de ejemplos y reflexiones sobre la producción popular. En ellas, analizamos situaciones concretas donde el escenario podría ser mejor para los más débiles, que involucran desde lo generado trabajando la tierra (lanas, maderas, hortalizas, frutos subtropicales, pescados); el respeto por la cultura de los pueblos originarios; los problemas de ambiente; el manejo de la energía renovable, hasta las dificultades que generan reglamentaciones que no están pensadas para promover o proteger a las unidades más pequeñas.

En esta nota, se intentarán reseñar los puntos de vinculación entre los casos presentados, anclando el tema en una estrategia general para mejorar la calidad de vida de los que menos tienen.

El primer elemento a destacar es que no nos referimos a población desocupada ni a asalariados mal pagos. Los compatriotas involucrados en nuestros casos trabajan en forma independiente. Y podrían trabajar más tiempo ellos, y más –muchas más– personas sumadas a ellos. En algunos casos, esencialmente en los temas ambientales, hay además situaciones que el mercado no resuelve y los gobiernos no encaran, por lo que hay trabajo potencial a realizar que hoy no es implementado.

En consecuencia, no estamos en casi ningún caso ante problemas de distribución injusta del ingreso generado en la producción de un bien, a causa que algunos capitalistas retribuyen de manera insuficiente el valor del aporte realizado por sus trabajadores. Este sería el conflicto tradicional, que es intrínseco al capitalismo. En la gran mayoría de las situaciones, en cambio, analizamos producciones que son llevadas adelante sin patrones y sin personal en relación de dependencia. La contratación de empleados es marginal, respecto del trabajo individual o familiar o comunitario.

En el caso agrario, el grueso de los problemas aparece luego de producir el bien que atiende alguna necesidad. Cuando el poste de quebracho está en el suelo del monte, el cabrito destetado, el morral artesanal o el poncho confeccionado, la banana cosechada y empacada, allí aparece el vínculo más importante con el resto del sistema económico. Aparece la articulación entre quien trabajó la tierra, definió y obtuvo algún fruto de ella y otro actor económico, cuya meta está orientada de manera excluyente al lucro. Allí es donde se produce la apropiación de gran parte del valor generado por el productor primario, que va a parar a manos de comerciantes, transportistas o meros intermediarios.

Será valioso incorporar a la caracterización social de nuestra comunidad el hecho de que hay centenares de miles de compatriotas aplicados a transformar la naturaleza en beneficio general, a través de tareas que no encuadran en esquemas de relación capital - trabajo, y que deben ser protegidos cuando integran sus bienes al mercado capitalista. Ellos, sumados a quienes brindan servicios técnicos y personales, y agregados a

todos quienes pueden y deberían trabajar en la protección y remediación del ambiente o en la producción de energía de manera distribuida, a partir de fuentes renovables, sin configurar por ello empresas con fines de lucro, representan una muy importante proporción de los ciudadanos en condiciones y actitud de trabajar. Para todos ellos las reglas de la competencia capitalista –mucho menos las del capitalismo global concentrado– no deberían ser de aplicación. Es más: debemos tener un cuerpo de reglamentaciones en base a proteger ese trabajo de la invasión de quienes tienen como único sentido la acumulación de beneficios económicos.

Buena parte de los ejemplos mostrados en la serie "Una que podamos todos" señalan que en las cadenas de valor donde conviven sin regulación quienes organizan su vida alrededor de agregarle valor a la naturaleza o de brindar servicios comunitarios, con quienes tienen el lucro como meta excluyente, estos subordinan y en el límite esclavizan a aquellos. Esto no sólo afecta la equidad, sino además le resta eficiencia a la tarea de cualquier comunidad, al poner en el bolsillo de algunos el valor generado por otros. En términos puramente económicos: si quien agrega valor es despojado de los recursos para invertir en la reproducción y expansión de su actividad, la cadena de valor languidece y es probable que involucione hacia niveles de explotación cada vez más agudos.

Volviendo al ejemplo del poste de quebracho. Si en el monte vale $ 40 por unidad y tras pasar por cuatro manos llega a $ 300, el hachero no sólo pierde dignidad en su vida, sino que pierde demanda para su producto. Así en todos los casos.

El análisis horizontal de las historias presentadas indica la imperiosa necesidad de construir puentes entre el sistema de producción de bienes y servicios que hemos caracterizado y el "mundo del lucro". Esos puentes pueden ser ámbitos públicos diseñados para comprar los bienes a precios justos y negociarlos con el resto de la cadena preservando así a los productores primarios. Para quienes sufran cierta urticaria con la burocracia –me incluyo– se puede y debe pensar en utilizar a las cooperativas de servicios públicos. Debería diseñarse esquemas por los cuales esas entidades actúen como compradores equitativos y luego como vendedores con otro poder en el mercado, hasta llegar al consumo final.

Con algo de agresividad conceptual, la idea expuesta se puede ampliar fácilmente al recuperador urbano que separa plásticos y los enfarda, mal vendiéndolos a las empresas que luego los procesan, o al taller textil, que queda sometido a las reglas que fija la marca de indumentaria. El primer eslabón, con ningún conflicto interno de distribución de ingresos –o con alguno resoluble– necesita ser defendido en una secuencia de apropiación de valor donde hoy los eslabones siguientes lo llevan a niveles menores a la subsistencia. Es casi como aquello de llamar al hermano mayor para que te defienda en una riña adolescente, pero mucho más grave que esto, porque aquí va la vida de miles y miles de personas y de sus entornos familiares.

Los estudios sobre la dominancia en las cadenas de valor surgieron por 1994 en la Universidad de Duke, en Estados Unidos, con un correlato en universidades inglesas. En los 20 años posteriores, la temática se jerarquizó y se diseminó por el mundo. Gary Gereffi, uno de sus creadores, está hoy a cargo de un ámbito específico del Departamento de Energía de los Estados Unidos. Analiza la distribución de poder e influencia al interior de todas las cadenas de valor para las energías alternativas en que ese país podría incrementar su participación, desde la generación hasta el uso. La idea saltó de la academia a la política pública concreta.

A esa metodología, valiosa por cierto, estamos proponiendo agregarle una idea fuerza: es importante –necesario– cuidar con detalle y aplicación a quienes producen con el objeto central y excluyente de tener una vida digna, conseguida suministrando bienes y servicios que la comunidad necesita. Permitir que quienes piensan y actúan sólo en términos de dinero sojuzguen al hachero, al hilandero, al criador de cabritos, al cartonero, a la costurera, decide el fracaso ético y económico –aunque esto último quede disimulado– de una sociedad.

EXPERIENCIAS CONCRETAS *DE LA PRODUCCIÓN POPULAR*

Foto: Javier Lastras

TAPALQUÉ *QUIERE PRODUCIR LO QUE CONSUME*

Ubiquémonos. Tapalqué es un partido de la provincia de Buenos Aires que está entre los diez menos poblados de ese distrito, con unos 10 mil habitantes. En el centro bonaerense, su posible actividad industrial se ha visto históricamente absorbida por Azul, Olavarría u otros partidos cercanos, más poblados y con mayor potencial agrícola, ya que en Tapalqué predomina la ganadería bovina y ovina.

En términos relativos, no parece el mejor lugar para llevar a la práctica el trajinado discurso de la producción para el consumo local. Un economista que aplicara los diversos manuales circulantes y que luego usara las fórmulas estándar de evaluación de proyectos recomendaría a un inversor ir a otro lugar probablemente.

Sin embargo, toda esa medida relativa no vale para un tapalquense. Quien vive allí y quiere crecer allí tiene el derecho –y la posibilidad– de darle la vuelta a los manuales, buscando soluciones sustentables técnica y económicamente para cada uno de los temas de la vida en comunidad.

Así piensa el grupo de trabajo dirigido por Gustavo Cocconi, el actual intendente y a su vez heredero de una lógica de gobierno

municipal que comenzó hace un par de décadas, cuando un prestigioso profesional pudo cambiar de signo político lo que era una tendencia conservadora de siempre.
El año pasado se reinauguró un matadero y frigorífico municipal, que tiene habilitación de SENASA para mandar carne a toda la provincia. Había sido abandonado hace unos 30 años y hoy puede faenar bovinos, cerdos y ovinos. Recibe animales sólo de productores –no de intermediarios– y luego los retiran los carniceros que el productor indica, eliminando toda intermediación. Doce de los 17 carniceros de la ciudad ya trabajan así y se ha reducido el precio al consumidor en más del 20 por ciento.
A 100 metros de allí se inaugurará en unos meses el peladero de pollos, con capacidad para 1.000 pollos por día. Las plantas de las grandes empresas faenan 100 mil pollos por día, pero el costo de elaboración por parte de la pequeña instalación será el mismo o menor, permitiendo además que productores independientes lleven sus pollos vivos y los retiren faenados higiénicamente, para venderlos en la zona. Aspiran a promover el pollo campero, sobre genética del INTA.
Unas cuadras más allá funciona la planta quesera, construida por el municipio y transferida a una cooperativa. Procesan nada más que 2.000 litros/día, pero es rentable y sus productos están jerarquizados. Luz amarilla: tienen todos los equipos para procesar y "ensachetar" leche fluida y cuentan con las instalaciones de un tambo, para ampliar la producción, pero la cooperativa analiza el tema como negocio y no le seduce, aunque se autofinancia. La alternativa es producir en una planta municipal, pero allí aparece el desafío de motivar a empleados públicos para que busquen conseguir la misma productividad que una unidad privada.
Se instala así en el centro del escenario una contradicción fuerte: si se apela a la iniciativa privada, aunque sea bajo forma cooperativa, ésta jerarquiza las posibles actividades, eligiendo sólo las de mayor ganancia. Se descartaría así incluso producciones de retorno positivo pero pequeño. Si en cambio se piensa en unidades municipales, hay que encontrar sistemas de motivación y control que superen una cultura del trabajo que suele no ser compatible con situaciones como ordeñar todos los días a las seis de la mañana.
En eso están. Rehabilitaron un hotel de 25 habitaciones de buen nivel y discuten si concesionarlo –con lo cual construirían un monopolio local– o administrarlo directamente, con la incertidumbre de si un caño roto a las tres de la mañana sería arreglado en tiempo y forma. Construyeron una huerta comunitaria de tres hectáreas y tienen dificultades para conseguir voluntarios.
En ese proceso de controversia cultural aplican el ingenio hasta el límite. Un caso: las panaderías del lugar venden pan a $ 20/25 el kilo. El municipio compra harina en un molino de Bragado a $ 4 el kilo y licita entre las panaderías la manufactura de 600 kilos por día para atender a su hospital, su hermoso centro de vivienda para jubilados y otras funciones sociales. En total, el pan le cuesta $ 5,5. Mientras tanto, siguen rumiando cómo tener un molino pequeño propio y alguna elaboración.
Revisar la lista de tareas y preocupaciones de este municipio permite sedimentar tres ideas fuerza:

a) la pequeña -y aún muy pequeña- escala en producción de alimentos tiene factibilidad técnica y, en todos los casos, la posibilidad de autofinanciarse de modo permanente.

b) cuando aparece la lógica capitalista cruda, podrá suceder que algo deje de producirse –leche en sachet– porque otra cosa –queso– da más ganancia.

c) cuando se debilita el tejido comunitario, como sucede en la sociedad moderna, el empleo público suele ser refugio de subsistencia. Convertirlo en una tarea de servicio social es todo un proyecto político, que se hace imprescindible para cubrir los efectos comunitarios negativos de la lógica empresaria más elemental.

HILANDO *FINO*

La ganadería ovina, tradicionalmente productora de carne y de lana, ha tenido una muy singular evolución en nuestro país, vinculada a la forma de integración argentina en la división internacional del trabajo. En el siglo XIX, antes del desarrollo de la industria frigorífica, que permitió conservar y transportar carne a largas distancias, los ingleses colonizaron no sólo la Patagonia, sino también grandes superficies de la Pampa Húmeda con ovinos, para abastecer de lana a su industria textil. Esto tuvo gran importancia para esa cadena de valor, hasta que la ganadería bovina reemplazó a la ovina, al ritmo de instalación de los grandes frigoríficos exportadores. Las grandes majadas de ovejas se recluyeron en la Patagonia y en Corrientes, por razones ecológicas específicas y Australia creció como el gran proveedor de lana a Inglaterra, en sus inmensos territorios semiáridos.

Hoy tenemos unas 15 millones de ovejas, bien lejos de los casi 80 millones de fines del siglo XIX. Más del 60% está en la Patagonia, se mantiene cierta presencia en Corrientes y el resto está disperso en todo el país, porque las pequeñas majadas de ovejas son una forma típica de producción de carne para consumo familiar, ya que un cordero provee unos 20 kg. de carne, frente a los poco manejables 100 kg de un novillito, a escala doméstica. Ahora bien, a razón de 3.5 kg. de lana sucia por animal esquilado –que son los adultos– la zafra lanera anual debería superar cómodamente las 200 mil toneladas.

Sin embargo, las estadísticas normalmente apenas superan la mitad de esa cifra. Acompañando el prejuicio elemental de cualquier lector, me apresuro a señalar que una parte debe explicarse por la venta en negro de una parte de la esquila. Pero mucho más importante que eso es que la lana producida en las pequeñas explotaciones de toda la región andina, del noroeste, de Córdoba y de gran parte de la propia provincia de Buenos Aires, se arruina expuesta a la lluvia y los insectos, se quema o hasta se usa para tapar pozos del campo. Difícil estimar este volumen, pero no menos de 50 mil toneladas de lana sucia, cuyo valor de mercado es hoy de unos 20 $/kg, que procesadas pueden llegar a representar como mínimo unos 2000 millones de pesos en pulóveres, alfombras, objetos de fieltro y tantas otras variantes, simplemen-

te vuelven a la tierra degradadas.
¿Por qué? Por dos motivos diferentes. En las zonas distantes de la Patagonia, Buenos Aires o Corrientes, porque siempre fue así. Las ovejas se tienen para que produzcan corderos y la lana se hila manualmente, con técnicas casi precolombinas y con tan baja productividad que enormes cantidades no se usan. Además, al hilar lana sucia y luego lavar la prenda o el hilado, el resultado es de calidad inferior para los parámetros de mercado actuales.
En las antiguas zonas ovinas de Buenos Aires o Córdoba, por su parte, los lavaderos instalados cerraron, quedaron modestas barracas que compran la lana y la llevan a los también muy pocos lavaderos que quedan a distancias razonables para transportar ese material. Para justificar su negocio la barraca suele pagar menos del 20% del valor al cual luego vende al lavadero, con lo cual al productor el material le resulta más una molestia que un negocio. Resultado: La lana se tira y también han cerrado buena parte de las barracas.
El escenario resultante es que se deja de generar no menos de 20 mil trabajos directos diseminados en toda la geografía nacional. Se trata de uno más de los problemas derivados de focalizar la perspectiva en las grandes unidades industriales y desinteresarse de los sistemas distribuidos. Es muy simple diseñar lavaderos de escala pequeña, pero no se hace. Las máquinas para cardar y peinar, posteriores al lavado, ya existen. El hilado en pequeña escala, incluso conservando matices artesanales, pero con productividad muy superior a las técnicas tradicionales, puede hacerse gracias a un equipo que se diseñó en el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) hace algunos años, y se promueve boca a boca en esta cadena de valor desprotegida. La alternativa de producir fieltro en lugar de hilado, con calidad, diseño y en pequeña escala, también está resuelta por el INTI y con experiencias muy positivas en el norte de Neuquén. Las etapas posteriores de manufactura de prendas son conocidas en miles de hogares y su producción está frenada porque ningún ámbito público se ocupa de sacar las garras de los intermediarios de la garganta de las tejedoras y costureras. Mucho disponible pero que no se puede usar si no se articula con lo mucho por hacer.
Inclusión por el trabajo. Es un concepto que se ha ido estrechando y limitando hasta hacerlo sinónimo de la inclusión por el empleo, como si sólo la relación de dependencia construyera un futuro estable. Este aporte y varios de los que vendrán intentan recuperar el sentido amplio de trabajo, que no es otra cosa que atender una demanda socialmente necesaria, individual o colectivamente, articulado o aislado, pero sin perder la dignidad en relaciones de explotación del hombre por el hombre.

Foto: Jeff Kubina

03 de Abril de 2014

EN EUROPA, LA PRODUCCIÓN POPULAR *SÍ SE CONSIGUE.*

Recordemos el objetivo global de esta serie de notas. Buscamos anudar a través de análisis parciales y presentados de manera no estructurada, escenarios posibles en que se puede atender demandas o necesidades sociales a través de sistemas de producción diseminados en la comunidad, que no necesitan rendir culto al gigantismo.

No se pretende, por la contraria, sacralizar lo pequeño o lo artesanal. Se busca mostrar, en situaciones concretas y específicas, que por acumulación se conviertan en doctrina, que la participación comunitaria eficiente puede ser una alternativa ventajosa –y en ocasiones la única– para resolver problemas que hoy se exponen como sin solución (tirar la lana) o que tienen como única variante esperar a contar con capitales importantes (tratamiento de efluentes domiciliarios).

Esta idea de la intervención de múltiples actores individuales o pequeños, sea en red o en paralelo, llega hasta un espacio que el imaginario colectivo reserva sólo para inversiones gigantescas: la generación y distribución de energía.

La civilización moderna está organizada so-

bre el uso intensivo de la energía, en diversas formas.
El transporte, la iluminación, la calefacción, la preparación y conservación de los alimentos, las comunicaciones, por mencionar sólo necesidades comunitarias directas, aparte de la producción de todos los bienes que permiten lo anterior, necesitan energía, sea como combustible, como electricidad, como calor o como frío. Sin ella, nuestra organización debería mutar de muy dolorosa manera y seguramente con retroceso fuerte en la calidad de vida.
Sin embargo, a pesar de tan fuerte condicionamiento, los ciudadanos participamos sólo como usuarios de un sistema de provisión centralizada de energía.
Personas que no conocemos suben o bajan llaves en instalaciones enormes cuyo funcionamiento no comprendemos para que arranque o no nuestra heladera o salga nafta por la manguera del surtidor. Y además creemos que no hay otro camino.
Hace más de 60 años, no obstante, que en muchos países se evalúan y aplican soluciones que imaginan escenarios distintos. Ya hace más de medio siglo que un ámbito del gobierno sueco publicó un documento "Suecia solar", que a partir de la certeza de poder generar energía en diversas formas a partir del sol, y como el sol está en todos lados, discutía qué organización social resultaría de seguir ese camino.
Después se sumó el viento como posible fuente renovable y ya fue rotunda la convicción que existen soluciones de generación distribuida y de tamaño tan pequeño como se desee.
Desde que el sendero técnico quedó claro y además se innova sobre él de manera permanente, el debate se trasladó al plano económico.
Los gobiernos en general y de países periféricos en particular, agobiados por sus estrecheces presupuestarias han caído en la trampa de evaluar las opciones en términos de inversión inicial por unidad de potencia instalada y por esa vía han reiterado una y otra vez la elección de grandes instalaciones en base a fuentes no renovables (petróleo, gas o carbón).
Lamentablemente, no se aplican criterios de evaluación social, que darían rotundo beneficio no sólo en términos económicos a largo plazo, sino de sustentabilidad del recurso y de construcción de una participación comunitaria intensa en la generación de energía, utilizando hasta los techos de las casas más humildes.
En el país ya están disponibles calefones solares producidos por más de diez empresas, que ya antes de la modificación tarifaria tenían plazos de repago, por ahorro de gas, entre cuatro y veinte años según las zonas del país, considerando la caótica grilla de tarifas que hoy se aplica.
También se cuenta con oferta para generación eléctrica solar y eólica en baja escala. Es inminente la aparición de una oferta para asegurar en base a energía solar la disponibilidad de agua en todo tiempo y lugar para edificios de hasta diez pisos.
Se pueden producir motos eléctricas. Existe un grupo empresario que viene batallando para producir un auto eléctrico en el país, sin suerte en los pasillos burocráticos.
Hay variantes en avanzado grado de implementación para producir energía eléctrica a partir de residuos de aserraderos o a partir de una parte de la basura de las ciudades.
Sumando todos y cada uno de los casos, hay decenas y decenas de miles de técnicos y trabajadores involucrados, tanto en la fabricación, como en la instalación o el mantenimiento de esos equipos, hoy tomando mate en la trinchera.
Están esperando que se advierta que las energías renovables deben sumarse a una estructura de participación productiva con intervención de la comunidad, como iniciativa aún más importante que los grandes parques eólicos o solares, aunque no se opone a ellos.
En Dinamarca, Suecia, Alemania, Francia, el concepto se ha entendido y asumido. En España los gobiernos socialistas lo instalaron y el gobierno conservador está retrocediendo. La discusión es claramente ideológica, pero en concreto en Europa la producción popular de energía todavía se consigue.

EL PAN *ES MÁS QUE UN ALIMENTO*

En los muy penosos momentos del año 2001, con muchos miles de compatriotas que no contaban con lo más elemental, el pan confirmó su simbolismo primario en la cultura comunitaria. Todo grupo que se organizó desde la nada misma, primero pensó en la olla popular. Pero un minuto después hizo un horno de barro y produjo pan. Sólo en una instancia superior de esas comunidades de pelea y desesperanza se intentó tener una bloquera o producir chorizos o empanadas o tener un gallinero o una sala de costura.

El pan salía de esos hornos con una variada proporción de producto crudo o quemado o con la cocción justa. Y todo se comía. Alguna vez escuché a un dirigente piquetero responder a la crítica culinaria, diciendo que a él le gustaba el pan con sabor a humo. Luego, todo el período de inclusión por ingresos convirtió a aquellos argentinos en compradores de pan en establecimientos formales y se llevó para el recuerdo los hornos de barro, calentados con leña juntada por ahí.

La fuerte presencia cultural del pan como el primer elemento necesario en una mesa, sin embargo, ha servido de componente

movilizador para generar trabajo asociado y de calidad en las comunidades más alejadas de la atención de los funcionarios o inversores que puedan inducir el desarrollo de un lugar. Una panadería moderna, diseñada con las mejores técnicas y encarada con criterio cooperativo puede ocupar unas diez personas en forma directa, para poder contar con toda la gama de panificados, desde la milonguita hasta el pan dulce o la torta de cumpleaños, dependiendo su evolución sólo de la capacitación técnica de sus integrantes.

En términos macroeconómicos, se trata de un proyecto que probablemente no figurará jamás en un plan estratégico difundido por televisión. Como contraste a esa falta de grandilocuencia y de potencia para ocupar primeras planas, se anotan los siguientes episodios, ocurridos en los últimos siete años:

-En Ranchillos, provincia de Tucumán, donde hubo un ingenio azucarero cerrado en 1967 y desde entonces no se había inaugurado una sola planta productiva que subsistiera hasta hoy, se puso en marcha la panadería comunitaria con asistencia orgullosa de toda la comunidad, himno, abanderados escolares y toda la simbología de los grandes eventos. Hoy ese grupo humano capacita a otros grupos de localidades vecinas, que han replicado el proyecto.

-En Guadalupe, barrio periférico de Reconquista, en el norte de Santa Fe, estigmatizado como el refugio de todos los malandras de la región, se repitió el fenómeno. La escuela del lugar promovió la cooperativa, se festejó la primera actividad productiva del barrio con bendición sacerdotal, lágrimas comunitarias y hasta discurso de políticos oficialistas y opositores que señalaron que siempre habían bregado por eso. Al presente la unidad ya se amplió dos veces.

-En el Barrio Obrero de Ingeniero Juárez, en Formosa, se habilitó una panadería que hoy administra la comunidad wichi y que representa un hito en la integración por el trabajo independiente de un grupo de habitantes perteneciente a pueblos originarios.

A esa nómina se pueden sumar casos de pequeñas localidades que no están conectadas a otra mayor por ruta asfaltada alguna y que cuando hay lluvias importantes se quedaban sin pan, como Siete Provincias, donde viven 50 familias, a kilómetros de Reconquista. O la periferia pobre de la ciudad de Tucumán, donde una cooperativa de mujeres se ufana hace algunos años de ser la alegría del barrio cuando van a retirar su pan caliente. Estos casos y varios otros, pensados y ejecutados con bajo perfil, mostraron y pueden seguir indicando en muchas situaciones similares que el pan no sólo es alimento. Es núcleo aglutinante de una comunidad. Es muestra primaria de autoestima, indica que se puede decidir sobre el destino colectivo.

Hasta los fracasos confirman esa tesis. Las panaderías sociales no hicieron pie en el centro de la ciudad de Tucumán o en un barrio populoso de La Matanza o en otro de Morón. Eso se dio porque los líderes sociales que las impulsaron pensaron centralmente en obtener un producto más barato que la panadería comercial. No advirtieron que ese no era el logro central y que con esa mirada razonaban en términos capitalistas tradicionales y trasladaban esos valores a los cooperativistas, con el resultado que todo el tiempo se retiraban trabajadores cuando conseguían una opción laboral con mayor salario.

La disparada de los precios actuales de los panificados, que aseguran a cualquier panadería un beneficio real superior al que han tenido por décadas, abre la posibilidad de que panaderías sociales bajen los precios sensiblemente y a la vez sus integrantes ejecuten un proyecto sustentable. No obstante, parece condición necesaria que en este caso se advierta que antes que el negocio debe estar la vocación de ubicarse como referente social de cooperación, de calidad de servicio, de prestación a precio justo. Esta idea, que funciona a la perfección en comunidades relativamente aisladas, es puesta en aprietos por las grietas de calidad de vida que provoca la gran ciudad. Producir pan para los compañeros: posibilidad social, que además ayuda a una vida digna. Buen objetivo.

LOS COLORES *DE LA TIERRA*

La humanidad se cubrió centralmente con ropas tejidas con algodón, lana, seda y otras fibras naturales hace más de 30 siglos y hasta fines del siglo XIX, en que aparecieron las fibras sintéticas propias de la era del petróleo. Los colores de las prendas, en ese período, los suministró la naturaleza. Fueron ganando en vivacidad a medida que cada comunidad descubrió plantas o insectos con propiedades tintóreas y sobre todo cuando aumentó el comercio con regiones tropicales y subtropicales, más ricas en especies que la vieja Europa.

A comienzos de nuestra vida como nación, el índigo –el azul más profundo– y el carmín de cochinilla –el rojo más nítido– eran productos muy valorados en todo el mundo y hasta constituyeron motivos de conflictos armados, por la importancia de disponer de ellos para los uniformes franceses o ingleses. Después llegaron los químicos, con Bayer a la cabeza, y desplazaron esas producciones de origen recolector natural por polvos o líquidos producidos en algunas pocas fábricas, con columnas de destilación, reactores vidriados, chimeneas por doquier, generando un pequeño grupo de emporios de alcance mundial.

Hoy, apenas 140 años después de que apareciera el primer colorante sintético, los productos tintóreos naturales han sido arrinconados en el espacio artesanal, como algo que utilizan aquellos que apelan a técnicas primitivas, con una brecha con la sociedad moderna que se respeta por lo diferente, lo curioso, pero no por la utilidad generalizada. Se trata de una de tantas consecuencias de aplicación automática de una lógica capitalista que seleccionó sistemas de producción por el costo al cual podían ofrecer sus productos finales. Lo sintético desplazó lo natural y chau. No sólo se usó un solo parámetro –el costo directo–, descartando la evaluación de efectos ambientales o los desequilibrios en la concentración espacial de la producción. También la diferencia de peso político y económico de los actores hizo que en todas partes y también aquí se abandonara por completo el estudio de posibles mejoras tecnológicas en la cadena de valor de productos naturales, para mejorar su eficiencia y eventualmente competir en el mismo plano que el capitalismo concentrado desafiaba. La enorme mayoría de los intentos locales de aportar a los artesanos que tiñen con lo que la tierra brinda se limita a discutir el tamaño de los recipientes a usar o la temperatura de trabajo. El hecho que las artesanas deban buscar las hojas de aguaribay, las cortezas de eucaliptus, los frutos de mistol, la yerba de ayer, las cochinillas o toda otra hoja, raíz o corteza útil, a cada vez mayores distancias de su lugar de trabajo, no forma parte de los análisis. Insisto: se lo considera sólo parte de lo atípico, casi –exagero– como se mira a un pintor sin manos. El resultado de ese marco no puede ser otro que la previsible desaparición completa del uso de tintes naturales, que podría ser festejada en el altar de la modernidad.

Sin embargo, no es lo que pasa en el mundo. Hay por supuesto países periféricos que tienen una actividad recolectora de baja productividad, aportando materias tintóreas naturales a los artesanos del mundo

central. Perú, por caso, es el mayor exportador mundial de carmín de cochinilla. Pero eso no necesariamente implica el bienestar de los campesinos, sino probablemente estabiliza su dependencia. Los analistas comprometidos con el tema, por su parte, han advertido que hay dos industrias: teñir con productos de la tierra y, por otro lado, producir el colorante de manera eficiente y sustentable. Lo primero lo pueden hacer artesanos o industriales, si disponen del insumo. Lo segundo es una organización que recolecta las materias primas en el campo o el monte, por previa siembra o por manejo sustentable del monte, procesando luego el material en pequeñas plantas regionales, con la tecnología adecuada, hasta producir un polvo o un líquido de conservación, transporte y uso similar a su alternativa sintética. Nadie pensó de este modo en casi siglo y medio, porque lo sintético era más barato, aunque los efluentes de tintorería sean uno de los flujos más contaminantes del planeta y aunque eso signifique abandonar el territorio. En 2011, de manera coherente, en un simposio internacional de colorantes naturales que se realiza regularmente hace más de 15 años, una empresa francesa presentó una amplia gama de colorantes textiles naturales en polvo, rompiendo la lógica descrita. En este momento, Taiwán, por ejemplo, ya se avizora como líder mundial de productos teñidos sólo con estas materias primas.

En nuestro país se trabajó desde hace seis años en esta idea. Se domina la tecnología, se identificaron decenas de materias primas, a partir de información chaqueña, formoseña, santiagueña e incluso bonaerense. Las artesanas consultadas recibirían el producto como maná del cielo. En poco tiempo, la industria formal podría también utilizar estos materiales, remplazando los importados. ¿Qué falta? Sacarse las anteojeras y avanzar. En esencia, tenemos un sector agroindustrial completo pendiente, con complejidad técnica comparable a la industria del tomate o del vino, por ejemplo. Decenas de miles de compatriotas y millones de hectáreas están a disposición.

Foto: Christian Ostrosky

LOS PUEBLOS *RECOLECTORES DEL SIGLO XXI*

24 de Abril de 2014

Entre los pueblos originarios, la tradición de subsistencia de los wichi y de los qom, además de algunas etnias de menor presencia, todos habitantes del monte chaqueño de Salta, Chaco y Formosa, debe ser analizada con mucho detalle para que su integración al resto de la comunidad argentina sea la mejor. Se trata de pueblos recolectores, que se alimentaron de ganado vacuno, ovino o caprino, que pescaban, que utilizaban el monte como proveedor de frutos, de plantas medicinales, de leña y de madera para construir partes de sus viviendas y sus muebles. El chaguar, arbusto de la región, se sumaba a la lana como materia prima para sus textiles, que eran teñidos también con material extraído del monte. La economía de subsistencia se complementaba con los objetos de cerámica o cuero.

El monte era el hábitat a utilizar y proteger al mismo tiempo, con una lógica de uso a perpetuidad mucho más instalada en la comunidad que lo que hace el capitalismo actual.
Los ingenios azucareros fueron los primeros en irrumpir con su demanda de mano de obra masiva. Salían miles de hombres del territorio y volvían meses después llenos de alcohol y violencia y con algunos pesos sobrantes. La relación con el colonizador se hizo así –poco a poco o mucho a mucho– desconfianza y resentimiento. Los indígenas se integraron, pero como el eslabón súper explotado de la comunidad. Esto duró hasta la mecanización de la cosecha y fue remplazado por la nada misma.
La explotación petrolera del oeste de Formosa y la de Salta se llevó luego los individuos con mayor capacidad de integración como operarios de pozo. El resto de las decenas de miles de compatriotas fueron retrocediendo en el uso del espacio, con suerte diversa: desde la expulsión en buena parte de Salta, hasta la propiedad comunitaria en 360 mil hectáreas de Formosa, amparadas por una ley de hace varios años. En fin: se quedaron sin tierra o con tierra pero en ningún caso con un escenario de integración productiva al resto de la Argentina que se nutra de su cultura de siglos y siglos.
Las mejores intenciones nacionales o provinciales pasan habitualmente por dar acceso a educación bilingüe; crear institutos de cultura indígena o varias otras formas de sumar descendientes de los pueblos originarios a la cultura eurocéntrica de quienes llegamos en los barcos. En ese marco, nada de lo que sabían nuestros hermanos wichi o qom parece servir, ni para ellos, ni para nosotros.
Sin embargo, la cría de pacú en cautiverio que está proliferando en Chaco y Formosa, tiene como trabajadores casi excluyentes a wichi y qom, porque son los que mejor manejan peces. En Uganda, por comparar con países de economía simple, se producen centenares de miles de toneladas de pescado en sistemas donde la infraestructura la construyó el Estado y los operadores son cooperativas locales. La transcripción puede ser inmediata.
La miel, la recolección y procesamiento de materias primas tintóreas o medicinales, pueden tener como protagonistas relevantes a estos compatriotas.
Y sobre todo el aprovechamiento maderero del monte. Estudios muy serios de expertos forestales argentinos señalan que la explotación de un monte de forma que se extrae todo lo maderable de una parcela y se clausura 15 años para que rebrote, permite que un campo dividido en 15 partes iguales pueda ser trabajado a perpetuidad y con ingresos económicos muy interesantes. Sobre todo si se agrega a la madera cosechada el máximo valor posible, llegando a muebles. La desprolijidad extractiva de los criollos ha remplazado ese esquema por la devastación generalizada de buena parte de Santiago del Estero, Chaco y Salta, que se ha convertido en campos sólo aptos para leña y carbón o peor aún, ha sido desmontada para agricultura, sin evaluar el tiempo de agotamiento de su materia orgánica.
No hay mejor reforestador en potencia que un wichi o un qom. Una anécdota personal al respecto. En gira de trabajo por el este salteño, visitando comunidades wichi amenazadas por negociantes porteños o extranjeros que buscan sacarlos de la tierra por malos acuerdos económicos, un cacique me identificó como el "cacique" de los visitantes. Me invitó a una charla privada, para mostrarme su bien más preciado. Me encontré con un vivero de plantitas de algarrobo que crecían en latas vacías de picadillo de carne, que eran los únicos recipientes que disponía. Pidió ayuda para contar con más macetas. Las 500 unidades que recibió a los pocos días deben ser consideradas hasta hoy como uno de sus tesoros. Esa lógica, de cuidar el hábitat y a la vez vivir de y con él no ha sabido ser aprovechada hasta hoy para conseguir wichi, qom y criollos más felices. Tal vez podamos pensarlo entre todos y en unas décadas podríamos hablar de comunidades de pueblos recolectores que se han convertido en sedentarios pero tienen un modo de vida digno, en base a sus saberes ancestrales.

VERDURA FRESCA *Y FRUTA JUGOSA*

Los habitantes de las ciudades, cada vez más ubicados en el rol de consumidores y menos en el de productores, se acostumbraron hace ya décadas a proveerse de frutas y verduras en un comercio, reduciendo hasta casi eliminar por completo, su vínculo con la tierra, las semillas, el cuidado de lechugas o cebollas y su cosecha. Es signo de los tiempos que el gallinero doméstico, la huerta familiar y hasta el amasado de pan casero, pasan a ser anécdotas de abuelos y en algunos años más ni eso siquiera serán.

Los cambios de entorno no se limitan a esa brecha entre consumo y producción. Acompañando todas las otras ramas de producción del capitalismo global, la oferta se ha ido concentrando. Los frigoríficos pequeños para manzanas o peras, en Río Negro y Neuquén, hoy también son casi recuerdo, en un espacio donde un puñado de multinacionales controla toda la cadena, incluyendo obviamente la exportación. Los cinturones verdes de casi cualquier ciudad o los duraznos de Mercedes (Bs.As.) o la batata de San Pedro (Bs.As.) no existen más. La banana nacional, de Formosa o Salta, sólo se mantiene como oferta regional y eso por algunos grandes productores a los que cada vez les cuesta más confrontar con la Bonita, Chiquita o similares de Ecuador. Se podría seguir enumerando detalles de cada una de las especies, desde el

ajo mendocino o del sur de Buenos Aires; el tomate correntino; o la cebolla primicia santiagueña. Todas y cada una de las cadenas de valor se han organizado de un modo tal que los pequeños productores van uno a uno camino de la extinción, dominados por grandes corporaciones con integración vertical o por intermediarios que financian todo el proceso de siembra y cosecha pero se quedan con casi todo el valor agregado. Y esta es sólo la etapa productiva.

Se agrega la comercialización minorista. Los mercados de concentración surgen como un hecho natural para agrupar producciones que vienen de lugares muy distintos, cuya composición varía a lo largo del año y que luego se conectan con el consumidor final en un espacio único, la frutería y verdulería. Por supuesto, esto da lugar a nuevas intermediaciones, que no por necesarias dejan de agregar costo en términos que van a la mochila tanto del consumidor como del productor. Hace 50 años un consumidor curioso de Buenos Aires podía comprar un cacho de bananas en el Abasto y luego repartirlo con los parientes. Hoy, en las megalópolis, como Buenos Aires o Córdoba, hasta el verdulero puede optar por no ir al Mercado Central, porque hay otras capas de intermediarios que compran y reparten local por local, agregando nuevos pesos o centavos al precio final.

El resultado es que desde la planta hasta la mesa, cada fruta u hortaliza pasa por tantas manos, que no sólo su precio se agiganta sino que los bienes se deterioran. Los pocos estudios disponibles dicen que casi el 40% de la verdura de hoja o el 30% de los citrus pueden llegar a tirarse en la boca de expendio final, antes de venderlos. En el hogar, se calcula que el 20% de las peras o las mandarinas, si no se consumen en los primeros tres días, se deberán tirar. Para evitar tremenda sin razón, los genetistas desarrollan variedades de mayor conservación, pero afectando el sabor y la capacidad nutricional. Lo bueno y barato desapareció. Lo bueno, al contrario, pasa a ser calidad especial, de mayor precio aún que lo estándar.

La corrección de esto, que hoy conlleva un notorio deterioro de calidad de vida, no puede darse por normas y reglamentos, en la medida que no sólo se asocia a la concentración capitalista sino también a la concentración demográfica. Los nuevos escenarios hay que construirlos de abajo hacia arriba y ese es el proceso que se da en buena parte del mundo. El más elemental paso es inducir a los ciudadanos a que recuperen el contacto con la tierra, así sea en una terraza o un pequeño jardín. El siguiente círculo concéntrico es un esfuerzo por acercar la oferta de los mercados de concentración directamente hasta los consumidores, lo cual reduce los costos de intermediación, pero a cambio exige de los compradores la posibilidad de agruparse para comprar y organizar la posterior disponibilidad casa por casa. También puede intervenir el Estado como gran acopiador o distribuidor, detrás del hipotético beneficio de pensar la función como un servicio social y no como una intermediación especulativa.

Todo eso puede suceder en paralelo y algunos beneficios acarreará. La solución estructural, como sucede en varios de los casos analizados ya en esta serie, está por construirse. Se necesitan sistemas de producción y comercialización adaptados a la nueva realidad social de alta densidad urbana, pero donde el ciudadano no quede fuera del vínculo con la producción. En Japón, Estados Unidos o Inglaterra han proliferado, por ejemplo, las asociaciones de Producción Asistida por la Comunidad (PAC), donde los productores firman con organizaciones sociales un compromiso de compraventa antes de sembrar y reciben por eso la financiación de sus usuarios. Cuando llega el momento de la cosecha se distribuye el producto entre quienes lo financiaron y en muchos casos se organizan verdaderos días de fiesta, en que los "urbanos" van a cosechar personalmente lo que compraron anticipado. Son muchos miles los grupos que funcionan así, pero ninguno en nuestro país. Se necesita ingeniería social, administración de conflictos, solidaridad de nuevo cuño. La verdura fresca y la fruta jugosa nos están esperando.

LA LECHE ES BLANCA *Y, A LA VEZ, OSCURA*

20 de Junio de 2014

La India en poco tiempo será el país más poblado de la tierra, porque su tasa de crecimiento vegetativo supera a la de China. Las consultoras de las corporaciones globales han llenado bibliotecas con los pronósticos optimistas de consumo que se derivan de centenares de millones que acceden a bienes típicos de clase media, en ambos países.

Sin embargo, la India no encaja en esa mirada lineal y un tanto perversa. Es toda contradicción y paradoja. La mitad de la población no tiene inodoro, pero como los celulares se han difundido masivamente, una ONG de las miles que pululan por el país usando fondos internacionales de ayuda, ha diseñado una aplicación para los teléfonos que permite mapear las zonas de "letrina masiva", para buscar sanearlas.

En el mismo apareamiento de lo absurdo, las vacas son animales sagrados para buena parte de la población y su carne no se consume, pero 70 millones de hogares tienen vacas lecheras, siendo la India el mayor productor de leche del mundo, con el 15% de la oferta global. Noventa millones de personas trabajan vinculadas al sector, con la gran mayoría ocupada en lo que llamaríamos producción popular elemental, con un par de vacas en el fondo de la casa, que rinden unos ocho litros por día y por animal. Vendiendo a 0,40 dólares el litro, los campesinos hindúes dicen, según un estudio de la organización GRAIN: "Nosotros cuidamos la vaca y la vaca nos cuida a nosotros."

Ese informe destaca que el 85% de la leche de India es, de esa forma de producción popular, lo mismo que el 83% en Colombia, el 70% del Paraguay, el 40% en México o Brasil y sólo el 15% en Argentina. Eso indica que en nuestro país la leche se origina mayoritariamente en unidades organizadas de un modo empresario que supera la dimensión familiar, para ser luego procesada en industrias cuyo tamaño medio ha aumentado en forma sistemática, concentrando finalmente la actividad en un muy pequeño número de empresas que controlan la cadena de valor. Podríamos decir que aquí la producción a escala doméstica está arrinconada técnica y económicamente.

Técnicamente, porque toda la atención está centrada en habilitar tambos para que abastezcan a las grandes usinas pasteurizadoras y transformadoras. Los fabricantes de equipamiento de baja escala prácticamente han desaparecido. Como contraste, Italia –país de primer mundo– es líder en el tema y ofrece plantas automatizadas para bajos volúmenes, demostrando que existe un claro mercado para ellas.

Económicamente, porque las grandes empresas condicionan a todo el sector comercial, obligando a que reciban toda la línea de productos y, de tal modo, es baja la posibilidad actual de competir sólo con leche pasteurizada o sólo con queso. Y encima de ese escenario de inferioridad para los pequeños, está instalado el hecho cultural de que sólo las grandes unidades son garantía de producto sano. Esto no sólo no es cierto en términos objetivos, sino que buena parte del grandilocuente maquillaje de aditivos y de postres infantiles o sutiles se genera con pérdida del aporte nutritivo original de la leche, a consecuencia de someterla a procesos térmicos que suelen afectar proteínas y vitaminas.

La lechería campesina argentina ha sufrido el embate de la concentración y ha perdido una batalla. La misma pelea se está dando en los otros países citados de Latinoamérica y en la India, entre otros muchos. Los tambos más pequeños pasan a ser tributarios de cooperativas que con el tiempo dejan de controlar. Las cooperativas luego son transformadas en sociedades anónimas y estas a su vez recorren un proceso de fusión, en cuyo extremo hay un manojo de multinacionales. En países como la India, esa inercia puede transformar de productores a consumidores sin trabajo a no menos de 60 millones de campesinos, cuando existen claras opciones de tecnificación y agrupamiento cooperativo tutorado por el Estado, que esencialmente debe garantizar el libre acceso al mercado de las producciones de menor escala. El camino posible en nuestro país es frenar la concentración e iniciar un proceso de reversión a través de apoyar la pequeña lechería en todas las provincias que hoy no producen leche, que son la inmensa mayoría. Ese proceso, de desarrollar la lechería chaqueña, del sur mendocino, de los valles fértiles de Chubut o de los valles calchaquíes, por citar sólo algunos ejemplos, debe ser realizado sin caer en la celada de auspiciar meras sucursales de las grandes corporaciones, ya que en tal caso no se resolvería integralmente el problema. Productores independientes, agrupados libremente para abastecer usinas de 10 mil/20 mil litros por día, que pueden atender poblaciones de unos 25 mil habitantes, pueden diseminarse por el país, con ahorro de costos para los consumidores, con reducción de gastos innecesarios de transporte, con sanidad adecuada y con un elemento central: el orgullo de la producción local de un componente central de la dieta popular.

EL RECICLADO *Y LA PRODUCCIÓN POPULAR*

Los residuos urbanos crecieron como problema comunitario desde los tiempos en que se comenzó a construir en altura y desaparecieron las partes de atrás de las casas, escondite perfecto para lo innecesario.
Hoy administrarlos es una cuestión de Estado en las grandes ciudades y un problema de salubridad elemental en las nuevas villas y urbanizaciones que aparecen de un día para el otro.
Como en casi todo espacio de la actividad económica y social, aquí también hay opciones distintas, según el nivel de participación comunitaria en la solución.
Tirar la basura en la calle o desentenderse de la bosta de caballo, en los tiempos previos a la era del automóvil, tal vez sea la primera y más notoria evidencia de lo que luego los politólogos y sociólogos clasificaron como "socializar las pérdidas", esto es: derivar hacia terceros cualquier problema ambiental originado en la propia actividad. La consecuencia inmediata de esto ha sido que el manejo de los residuos, que abarca su recolección, transporte y disposición final ha sido considerado, desde hace generaciones, como tarea externa a los ciudadanos, como responsabilidad de los gobiernos.
Las crisis económicas y la exclusión social pusieron en jaque esta lógica. Desde el extremo más doloroso de compatriotas buscando comida, hasta la primero anárquica y luego organizada tarea de recuperadores urbanos (alguna vez simplemente cartoneros), aparecieron actores inesperados e incómodos, tanto para los sectores más pudientes como para las administraciones públicas.
Era simple tirar todo a la calle y que el sistema se hiciera cargo. Deja de serlo cuando en lo que tiramos hay materiales que pueden y deben tener un nuevo uso a través del reciclado y, además, cuando se han construido inmensas montañas suburbanas de basura simplemente tapadas con una capa de tierra, a las que ya no podemos negarnos a ver.
Aunque nos neguemos a admitirlo, hay una vuelta atrás de más de dos siglos: la basura vuelve a ser un problema de todos y cada uno, con el agravante que antes el fondo de cada casa podía ser un destino y ahora la solución necesita de conciencia y compromiso de miles y miles, acostumbrados por el capitalismo global a pensar ante todo en su ombligo.
La separación en origen se convierte en condición necesaria para disminuir los volúmenes enterrados. El procesamiento y reciclado de los cartones, plásticos, metales, vidrio o maderas requiere modelos organizativos y tiene varias alternativas de escala. La basura electrónica viene a sumarse en el siglo 21.

El uso de los restos de alimentos para generar energía eléctrica es un tema técnico científico de características apasionantes, por las variantes que plantea, tanto de eficiencia como de tamaño de planta. Sobre todo eso, sin embargo, planea una decisión previa: quién se hará cargo de implementar los nuevos modelos. ¿Empresas que buscan el lucro, como ha sucedido por décadas con los recolectores y enterradores de residuos, que terminaron llevándose tajadas inadmisibles del presupuesto público como pago a sus servicios? ¿U organizaciones productivas surgidas de la comunidad, que integren cadenas de reciclado y de generación de energía, trasvasando hacia allí la experiencia organizativa invisible para muchos, pero existente y bien sólida, que produjo 15 años de cartoneo?

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o el de Córdoba o el de Rosario, por mencionar tres ejemplos que conozco, han simplificado su mirada y elegido el camino de la negociación empresaria. Los cartoneros serán un segmento convertido en asalariado de mínimo nivel, con progresiva extinción, encargados de llevar los reciclables a las grandes procesadoras, o simplemente se ampliará supuestamente al infinito el territorio utilizado para enterrar todo. El Gran Buenos Aires, por su parte, parece al respecto detenido hace 100 años, con barrios enteros de depósito de cirujeo, que sirven de freno al crecimiento del procesado por empresas, pero a la vez condenan a esos compatriotas a una vida no deseable en absoluto.

Las cooperativas de elaboración de artículos de vidrio o de plástico; la producción de briquetas de madera o de energía a partir de aserrín o recortes; el manejo ordenado del reciclado de papel, evitando importación de recortes, que crease o no, es más frecuente que lo que se conoce, la recuperación integral de los residuos electrónicos, son algunas de las actividades al alcance de sectores populares que pueden generar miles de puestos de trabajo. No son ni serán de generación espontánea. Necesitamos una política de reciclado popular, que dignifique el segmento, le de infraestructura y nos beneficie a todos, aunque nuestro ombligo siga siendo un bien precioso de admiración cotidiana.

24 de Julio de 2014

PODEMOS ACOSTUMBRARNOS *A VER EL AGUA BURBUJEAR*

Cultivar peces en el granero del mundo, que además tiene miles de kilómetros de costa y una enorme plataforma continental, se parece a conducir a contramano. Se ha hecho, pero básicamente por deporte. La siembra de alevinos de pejerrey en lagunas y hasta en estanques privados es la historia más recordable, hasta que apareció el éxito del salmón chileno y se lo buscó copiar en la precordillera neuquina. Durante décadas la acuicultura fue una actividad de reducidos círculos, sin horizontes comerciales masivos. Hasta fue responsable de errores como diseminar

carpas de origen chino en los canales de riego mendocinos, con el objeto que esos peces herbívoros los limpiaran de malezas, pero con tan poco control, que iniciativas como esa fueron responsables de eliminar pejerreyes de diques y otros cauces, en la darwiniana lucha contra las carpas.

Sin embargo, lentamente fue penetrando la idea de la conversión alimento vegetal/carne en la mente dilapidadora de recursos propia de buena parte del campo argentino. Porque resulta que 1 kg de carne bovina necesita 6 kg de alimento; 1 kg de cerdo unos 3 kg de alimento; 1 kg de pollo algo menos de 1,7 kg de alimentos y 1 kg de pacú sólo 1,2 kg de alimento, y buena parte de eso es maleza para la agricultura.

Los peces son los mejores conversores de alimento en carne del reino animal. Entonces, allí hay un negocio. Como sucede en varios otros escenarios si se trata de alimentos, además del negocio también hay una oportunidad de implementar organizaciones populares comunitarias, que en este caso se encarguen de proveer pescado para atender la demanda de proteínas de la población. En consecuencia, se abren caminos alternativos.

Por un lado, puede desarrollarse en este campo un mercado capitalista tradicional. Empresarios importantes de otros rubros alimenticios pueden tomar la iniciativa y sumar el pescado cultivado a su oferta. Esto ya sucede en el país con una empresa yerbatera importante, que ofrece pacú congelado en Buenos Aires. Otros empresarios se sumarán y se establecerá la dinámica ya conocida de competencias, alianzas y fusiones, propia de los mercados que se concentran por poder financiero y por capacidad logística.

Por otro lado, puede utilizarse la actividad como potente factor de desarrollo e inclusión social, especialmente en la Mesopotamia y el Noreste. Eso no se logra sólo habilitando la llegada de inversores y generando "fuentes de trabajo". Hay un camino más sólido, que debería replicar la experiencia de países como China, Vietnam e incluso países sin tradición socialista como Uganda. En todos esos casos, el Estado se hace cargo de construir la infraestructura: alimentación y descarga de agua, lagunas en parcelas separables, producción de alevinos (los peces bebé), plantas de alimento suplementario. La operación posterior de cría y engorde queda a cargo de grupos comunitarios que finalmente cosechan y pueden destinar su producto al consumo propio, la venta doméstica sin procesar o al procesamiento detallado, como hace cualquier pescadería de pequeña escala. Por supuesto, el límite superior no existe, en caso de organizar la distribución hasta los centros urbanos.

En China y Vietnam esta tarea tiene raíces culturales milenarias. Para el pueblo chino, criar carpas es como lo fue tener gallineros para nuestros abuelos. Vietnam debe haber superado el millón de hectáreas dedicadas a la acuicultura. Uganda, como país más joven, piensa la actividad como en esta nota se sugiere: con dimensión económica y para integrar a los pueblos indígenas a actividades conocidas y sustentables.

Todas las etnias recolectoras del norte argentino han pescado siempre. Es más: son los primeros trabajadores contratados en los emprendimientos acuícolas que van creciendo día a día. Construir escenarios más independientes para ellos resultaría un camino virtuoso para la transición de pueblos recolectores en sedentarios. No sólo aquí es tema altamente seductor la acuicultura, En todo el complejo lagunero de la provincia de Buenos Aires, hoy casi ignorado o hasta ocultado como una vergüenza comunal en tierras agrícolas, la producción de peces fortalecería las economías locales y mejoraría el asentamiento firme de parte de la población.

El destino del producto no es para nada problemático. Tanto en el mercado interno como en la exportación, las cifras y proyecciones marcan el necesario remplazo del pescado capturado por el cultivado. Ver el agua burbujear por el alboroto de miles de peces cuando llega el momento de la cosecha puede ser una experiencia a la que nos acostumbremos cada año un poco más y –si así lo queremos– una herramienta apta para sumar facetas democráticas a la economía, tan castigada por la concentración.

BAGAYEROS *TEXTILES INTERNOS*

Cada tanto los porteños o los habitantes de las grandes ciudades argentinas son interpelados por alguna nota de color, sobre el contrabando hormiga en los puestos fronterizos con Bolivia o Paraguay. La salida de harina, fideos o aceites y la entrada al país de ropa que primero era boliviana y luego china, es un clásico del intercambio fronterizo.

Sin embargo, esa pintura atrasa. Quien visite por curiosidad una feria como la paraguaya a la cual se accede simplemente cruzando a pie desde Clorinda, en Formosa, por ejemplo, descubrirá allí algo de ropa china, pero mayoría de ropa argentina, del mismo origen que la que se vende en La Salada, cerca de la Capital Federal.

En los números macro, algún aventurado economista y, por supuesto, los administradores de esa feria del Conurbano pueden sostener que ese es un hecho auspicioso para la economía argentina. Desplazar al costo chino suena espectacular. Sin embargo, ese triunfo no es asignable a la tecnología de producción, a la organización, al transporte, a sistemas de promociones impositivas o similares. Es directa evidencia de la auto explotación de miles de talleristas que pueden controlar un único costo variable: su propia remuneración.

La industria de la indumentaria no ha podido automatizar la etapa final del proceso de producción de una prenda. La confección se hace en buena medida de la misma forma que lo hacían nuestras abuelas, con equipos de bajo costo unitario, sobre los cuales se inclinan las operarias sin límite de horas. Consiguientemente la capacitación de las/los trabajadores del sector es posible implementarla en corto plazo y la oferta laboral es abundante y supera a la demanda. La posibilidad de explotación de estos trabajadores es casi una idea obvia

del capitalismo. La alternativa para ellos, que no diseñan, no tienen marcas conocidas, no publicitan, no pueden afrontar caros locales de venta, no es otra que la auto explotación, esto es: vender por su cuenta en conglomerados informales compitiendo salvajemente por precio. Como dice hoy uno de los gestores de La Salada: "un centavo por prenda hace la diferencia".

Una pequeña fracción de los compradores son consumidores finales, que se bancan los horarios de trasnoche y madrugada. La gran mayoría, no obstante, son ventas mayoristas a tours de compra del interior del país, que más tarde hacen una parada en el barrio de Flores, en Buenos Aires, y luego vuelven a sus pueblos, con 10 a 30 mil pesos de mercadería por persona, que revenden al triple de su costo, sin mayor riesgo, porque han comprado en base a listas de pedidos previos.

Esos bagayeros de nuevo cuño obtienen beneficios muy superiores a un asalariado medio, vendiendo a su vez en competencia favorable con las marcas más conocidas, porque estas trabajan con márgenes aún muy superiores a los mencionados.

Cambiar esta perversa cadena no se limita a ordenar la responsabilidad impositiva de cada eslabón, como reclaman los industriales formales. Tal vez uno de los caminos más solventes sea asegurar demanda a precios justos a la mayor cantidad de talleres posibles. La primera puntada está en el sector público. El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación implementó el plan para contratar a talleres en todo el país un millón de guardapolvos escolares. Ese programa ha tenido éxito, a pesar de las dificultades que algunas reglamentaciones generaron. Puede mostrar talleres que hoy son bastante autónomos, desde los promovidos por Milagro Sala, en Jujuy, hasta una densa red en el Gran Buenos Aires. La provincia de Formosa, con otro modelo, instaló una empresa central de diseño y corte de guardapolvos y luego traslada los cortes a costureras domésticas, que acceden a ingresos dignos. Ya han saltado a ropa de hospital y a uniformes policiales, con sostenido crecimiento. Debe haber más ejemplos similares en el país, que quien esto escribe desconoce.

El paso siguiente, que es poner a los talleres en contacto directo con los consumidores, condicionando así el margen de los bagayeros o directamente eliminándolo, ya no es tan simple. En teoría, bastaría con disponer espacios de concentración como los actuales del conurbano, pero regenteados por el Estado, con venta en horarios comerciales normales y con un sistema que no obligue al productor a vender en forma personal, lo cual afecta hoy su productividad y su salud.

En la práctica, sin embargo, hay una condición de confianza básica, que debería superar la prueba del tiempo. Un sistema como el descripto debe ser sin retorno. Esto es: no puede ser un canto de sirena basado en cálculos de acumulación política de ninguna naturaleza, sino que debe emerger de un diagnóstico elemental, pero profundo: si se quiere dignificar el sector hay que reducir al mínimo la intermediación entre el productor y el consumidor. No hay espacio para probar y desandar o para la generación de nuevas capas de intermediarios. Los bagayeros internos deberían pasar a ser recuerdos de tiempos idos o transformarse en actores no abusivos de un sistema de distribución y venta como el esquematizado. Eso sería lo justo. Pero tengamos bien presente que el capitalismo librado a su inercia no construye escenarios justos. Sólo un Estado que crea en la imprescindible concreción de esos ámbitos, puede lograrlos.

EL TRÓPICO NACIONAL *CASI IGNORADO*

Somos un país con los cuatro climas, se dice. También sabemos que la cultura del puerto busca disciplinar a la Nación toda desde hace 200 años y en buena medida, lo consigue. Eso lleva a percibir la vida cotidiana y comunicarla desde los reflejos del habitante de Buenos Aires. Si llueve es una molestia, aunque eso suceda luego de meses de sequía en algún lado; si a la inversa, medio país pasa meses entre el agua, la televisión nacional apenas lo señala, salvo que una boca de tormenta en la costanera porteña se lleve a alguien al río.

Foto: Scheihing Edgardo

No es de extrañar que millones de argentinos ni siquiera tomen nota que el Trópico de Capricornio tiene algún trayecto por Formosa, Salta y Jujuy. No interesa tanto el detalle cartográfico como la constatación que hay allí una región con realidad y potencial distintos que la pampa húmeda. El potencial agrícola y agroindustrial se percibe casi en cada esquina.

Las calles de Formosa tienen multitud de plantas de mango, lo mismo sucede en cada casa de Misiones con la papaya. El camino de Tartagal hacia el norte, en Salta, tiene grandes extensiones con palta silvestre al lado del camino. Ni qué decir del banano, antigua actividad de Salta y Formosa, que abastecía todo el país hace medio siglo y hoy se ha concentrado y retirado, representando un horizonte para apenas un puñado de productores medianos.

Ninguno de esos frutos tropicales constituye hoy un recurso de vida para las familias del Norte Grande. Ledesma, por caso, desarrolló plantaciones de palta en Calilegua (Jujuy) con el estilo empresario que se le conoce al grupo, pero no hay un correlato de algunos centenares de productores pequeños que vivan de ello.

Lo mismo para cada una de las alternativas. No faltan estaciones experimentales nacionales y provinciales que repasen cada una de las condiciones de los cultivos y estén atentas a asistir a productores. En Formosa, al respecto, se están reproduciendo bananos por clonación, desarrollando variedades de papaya enanas para facilitar su sistematización y cosecha; se ha completado un sistema de buenas prácticas para mejorar la calidad y productividad de bananales tan chicos como de dos hectáreas, con ejemplos de algún productor que tiene muy buen pasar siguiendo esas recomendaciones. Sin embargo, en términos macro, la producción tropical no aparece.

Veo dos razones para que eso suceda. La primera es estructural: la ausencia de mecanismos de protección a los pequeños productores hace que la apropiación, por parte de comerciantes y distribuidores, del valor generado en la producción primaria, sea tan relevante que nada queda a quien ocupa el primer eslabón de la cadena. Esto resta no sólo el estímulo para contar con productividad y calidad, sino que puede dejar de justificar la actividad misma.

Hay sin embargo otra razón adicional, que agrava el escenario si se lo compara con los problemas de los pequeños productores mendocinos o neuquinos, por ejemplo. La llegada de la agricultura a la región se caracterizó por el reparto de enormes extensiones a pocos individuos, que avanzaron con la caña de azúcar como estandarte y redujeron a condiciones de servidumbre a generaciones enteras. Todas las explotaciones alternativas quedaron marcadas por esa relación laboral. La explotación del monte o el cultivo del algodón o casi cualquier variante similar, significaron también trabajo a destajo para patrones sin alma.

La producción de frutas tropicales de calidad implica mucho trabajo manual. Cuando un agricultor familiar supera la dimensión en que basta con aplicar la propia familia a la tarea, se enfrenta a un doble problema: usualmente no conoce la conducta del empleador respetuoso de los derechos de su empleado y aquellos a quienes puede convocar están en la situación inversa. El resultado es que aun el más pequeño productor se queja de sus asalariados y prefiere no crecer a correr riesgos de establecer nuevas relaciones laborales. La papaya, la banana, la palta quedan así como proyectos frustrados.

Tal vez haya pocas situaciones productivas vinculadas con la tierra donde se generan situaciones circulares de frustración como en ésta. La horticultura tiene problemas parecidos en algunas zonas del país. La cuestión es que la producción necesita de un trabajo colectivo que ninguno de los actores tiene incorporado en su cultura, la que transita únicamente por someter o someterse. La misión aquí es especialmente compleja. Por un lado, asegurar que la comercialización no implica una forma disimulada de trabajo cuasi esclavo para el intermediario. Por el otro, instalar modelos de agrupamiento solidario, donde los beneficios se repartan proporcionalmente al esfuerzo aportado, estimulando de tal modo al pequeño productor a crecer junto con sus dependientes.

UNA PROPUESTA *FINAL*

7 de Septiembre de 2014

¿NO SEREMOS POBRES *LA MAYORÍA?*

El capitalismo moderno ha hecho de la pobreza una condición a ocultar bajo la alfombra, porque en definitiva es una medida bastante directa de la permanente generación de desigualdades, responsabilidad del sistema económico vigente en el mundo. Tanto se ha manipulado el concepto, que hay muchas formas de medir la pobreza, todas ellas auspiciadas o al menos toleradas por los centros de poder mundial. Para la periferia, el Banco Mundial definió una línea de ingresos básica que comenzó siendo 1 dólar por día y por persona y que luego ha ido incrementando, admitiendo así que se trata de una condición con aspectos absolutos -conseguir sobrevivir- y aspectos relativos, que surgen de comparar con la condición de vida de los más pudientes.

En el centro, especialmente Europa, la pobreza es esencialmente un concepto relativo, porque la indigencia -o pobreza extrema, como término similar- se considera eliminada. En consecuencia se define como pobre a la fracción de la población que tiene ingresos menores al 40/50/60% -según los países- del ingreso promedio nacional o de un parámetro estadístico alternativo. De tal modo, esos países admiten tener entre el 15% y el 40%

-Suecia a Rumania- de población en riesgo. Inglaterra, por mencionar un país arquetipo calcula cifras del 22 al 24%, aunque hace más sutil el cálculo, tomando dos referencias: ingresos sin pago de alquiler por vi-

vienda y con alquiler. Por si faltaran facetas para confundirse en el tema, Estados Unidos definió en 1960 una condición de consumo base y desde entonces la actualiza por inflación, con algunos cambios en la canasta para adaptarla a la forma de vida presente. Con ese camino, también allí estiman que "su" pobreza ronda el 20% de la población.

Un pobre hindú, en consecuencia, casi nada tiene en común con un pobre sueco, en términos de su calidad de vida intrínseca. Los une, sin embargo, su condición relativa al interior de sus respectivas comunidades. Forman parte, cada uno de ellos, de la fracción "problema", de los ciudadanos que deben ser especialmente considerados si es que se aspira a creer y decir que la condición general de un país está en continua mejora.

El concepto recién vertido es central y clave. Si la mayoría de un país -incluyendo el discurso de su gobierno- pasara a creer que esa comunidad no tiene pobres o que estos constituyen una fracción cercana al error estadístico, transitaría por una suerte de limbo en el mundo actual. Ese riesgo es máximo en los países de ingresos medios, que adopten la forma de medir que el Banco Mundial usa para minimizar el problema en África o Asia. Como le sucede a Argentina y seguramente le pasa también a Chile, a Brasil o a Colombia. Si adoptamos la misma metodología que se recomienda para India o cualquier país africano, nuestra pobreza sería del 6 al 8 por ciento. Si tomamos una base de 4 dólares por día por persona, algunos grupos académicos llevan el nivel de pobreza al 16 por ciento. Si siguiéramos el camino inglés, en cambio, nuestra pobreza sería superior al 40 por ciento. Hay varias mediciones alternativas más. ¿Qué deberíamos hacer, entonces?

Por empezar, asumir una idea que no parece que la dirigencia política tenga incorporada: la pobreza que tengamos será "nuestra" pobreza, la que como país creamos que mide la asignatura pendiente de equidad. Por lo señalado, no hay ni habrá por mucho tiempo un ranking mundial de pobreza, porque no es para nada un parámetro que se mida de manera uniforme a lo largo del planeta, como sería la disponibilidad de agua corriente o de energía eléctrica. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer es decidir -como comunidad, como país- cuál es el criterio que mejor interpreta nuestras aspiraciones sociales, sea cual sea el índice de pobreza que ello lleve a calcular en el presente.

Si queremos que todo argentino tenga una vivienda digna, animémonos a llamar pobre a quien no la pueda comprar o construir. Si así lo hacemos, aumentará nuestra obligación de pensar programas de "un lote para todos" en lugar de "un auto para todos" o "un plasma para todos", que son consignas consumistas francamente restringidas, secuelas de la lógica del derrame.

Si pasamos a comparar nuestros pendientes sociales con los europeos y no con los africanos o asiáticos, podrá parecer que aumenta nuestra deuda interna, pero en rigor sólo la pondremos en evidencia, porque de cualquier modo allí está hoy, salvo en nuestras estadísticas. Buena parte de la considerada clase media actual, se debería sentir contenida y hasta aliviada, por aparecer en los planes de gobierno, primero dentro del universo de los "problemas", como obligación elemental para formar luego parte de las soluciones.

Con la metodología del Banco Mundial, estimamos la pobreza hace algo más de una década, en casi el 50%. Hoy -reitero- el número daría entre el 6 y el 8 por ciento. Es hora de celebrar esa reducción y de abandonar el método. Hay que salir por arriba de una trampa que nos impide identificar nuestras debilidades, que no nos lleva a comparar nuestra organización y metas sociales con las de los países de ingreso per cápita doble y triple del argentino. Hay que animarse, entenderlo, explicarlo y llenar el país de discusiones sobre cómo aseguramos trabajo para todos, vivienda para todos, cuidado para cada enfermo o para cada anciano que lo necesite -no me incluyan-, jardines maternales para cada niño cuyos padres lo necesiten desde los 45 días, y así sucesivamente. Si para buscar y conseguir eso, debemos asumir que los pobres somos mayoría en el país, aplicando los criterios suecos o ingleses, que sea. Bienvenido.

Enrique Mario Martínez *es ingeniero químico. Fue decano de la Facultad de Ingeniería de la UBA 1973/4; diputado nacional por el Frepaso/Alianza (1999-2000); presidente del INTI (1986-1988 y 2002-2011). Actualmente es el coordinador del Instituto para la Producción Popular (IPP), brazo ejecutor de los proyectos de la Asociación Civil Construcción Colectiva.*

CONSTRUCCIÓN COLECTIVA

IPP
INSTITUTO PARA LA PRODUCCIÓN POPULAR